



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
"PEDRO RUIZ GALLO"  
ESCUELA DE POSTGRADO**



**MAESTRÍA EN DERECHO**

---

**"Los límites en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y  
las decisiones emitidas en casos controversiales por parte  
del Tribunal Constitucional del Perú"**

**TESIS**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  
MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y  
GOBERNABILIDAD**

**AUTOR:**

**Abog. Benavides Falen, Ana Rosa**

**ASESOR**

**Dr. Hernández Rengifo, Freddy Widmar.**

**LAMBAYEQUE- PERÚ**

**2019**

Elaborada por:

---

ABOG. Ana Rosa Benavides Falen  
TESISTA

---

DR. Freddy Widmar Hernández Rengifo

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro  
Ruiz Gallo para optar el Grado de Maestra en Derecho con mención en  
Constitucional y Gobernabilidad

Aprobada por:

---

Dr. Rafael Hernández Canelo  
PRESIDENTE DEL JURADO

---

Dr. Miguel Arcángel Arana Cortez  
SECRETARIO DEL JURADO

---

Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández  
VOCAL DEL JURADO

## **DEDICATORIA**

.

**A Dios, por ser mi guía y mi fuerza que  
me impulsa a seguir adelante.**

## **AGRADECIMIENTO**

**A mis padres, por su apoyo constante y desinteresado, a lo largo de estos años, a mis maestros de la Escuela de Post Grado Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por sus enseñanzas y a quienes con su apoyo formaron parte de este resultado.**



# ÍNDICE

RESUMEN .....	9
ABSTRACT .....	10
INTRODUCCIÓN .....	11
 <b>CAPITULO I</b> .....	12
<b>ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO</b> .....	12
1.1. UBICACIÓN .....	13
1.2. EL PROBLEMA .....	14
1.2.1. Formulación del problema .....	15
1.2.2. Justificación del Problema .....	15
1.3. OBJETIVOS .....	16
1.3.1. Objetivo General .....	16
1.3.2. Objetivos Específicos .....	16
1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	17
1.4.1. Formulación de hipótesis.....	17
1.4.2. Variables e Indicadores .....	18
1.4.3. Población y muestra .....	18
1.4.4. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. ....	20
1.4.5. Métodos y procedimientos para recolección de datos:.....	20
1.4.6. Análisis estadísticos de los datos. ....	21
 <b>CAPÍTULO II</b> .....	22
<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL</b> .....	22
2.1. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. ....	23
2.2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ....	24
2.2.1. Características del Tribunal Constitucional. ....	25
2.2.2. Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional. ....	26
2.2.2.1. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional. ....	26
2.2.2.2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional .....	27
2.2.2.3. Tribunal Constitucional como órgano político .....	28
2.3.1. Funciones y Atribuciones del Tribunal Constitucional .....	29
2.3.1.1. Competencias en los procesos constitucionales .....	29
2.3.1.2. Competencias exclusivas .....	30
2.3.1.3. Competencias compartidas .....	32

2.3.1.4. Competencias no previstas e implícitas.....	33
2.3.1.5. Votación y Publicación de las Decisiones del Tribunal Constitucional .....	34
2.3.2. Alcances sobre la Jurisdicción Constitucional en Legislación Comparada .....	37
2.3.2.1. El tribunal constitucional en Alemania .....	37
2.3.2.2. La Corte Constitucional en Italia.....	38
2.3.2.3. El Tribunal Constitucional de España .....	39
2.3.2.4. La Corte Constitucional en Colombia .....	41
2.3.2.5. El Tribunal de Garantías Constitucionales en Ecuador.....	42
2.3.2.6. Tribunal de Control de Constitucionalidad de Guatemala .....	43
<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>44</b>
<b>EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL .....</b>	<b>44</b>
3.1. AUTONOMÍA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	45
3.1.1. Autonomía Institucional.....	45
3.1.2. Autonomía normativa .....	47
3.2. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O UN EXCESO EN EL USO DE SUS FACULTADES Y LA APLICACIÓN DE SUS DECISIONES.....	49
3.2.1. El Neoconstitucionalismo y el Principio de Autonomía Procesal. ....	49
3.2.2. Definición del Principio de Autonomía Procesal. ....	51
3.2.3. Naturaleza Jurídica de la Autonomía Procesal. ....	53
3.2.4. Legitimidad del Principio de Autonomía Procesal. ....	54
3.2.5. Posturas doctrinarias respecto a la legitimidad del Principio de Autonomía Procesal. ....	59
<b>CAPÍTULO IV .....</b>	<b>63</b>
<b>LÍMITES AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL .....</b>	<b>63</b>
4.1.1. Límites formales .....	64
4.1.2. Límites Materiales.....	67
<b>CAPÍTULO V .....</b>	<b>74</b>
<b>ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .....</b>	<b>74</b>
5.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	75
5.1.1. Caso arancel del cemento .....	75
5.1.2. Caso Petroaudios – Excarcelación de Alberto Quimper .....	78

5.1.3.Caso píldora del día siguiente .....	82
5.1.4.Caso reingreso a la carrera judicial o fiscal .....	85
5.1.5.Caso condonación de la deuda de Panamericana Televisión.....	90
5.1.6.Caso testamento de Riva Agüero .....	98
5.1.7.Caso El Frontón .....	101
5.1.8.Caso Roberto Torres Gonzáles .....	106
5.3. PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO – PRÁCTICO .....	122
5.3.1.Base filosófico – constitucional.....	122
5.3.2.Base Normativa.....	122
5.3.3.Propuesta legal .....	123
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>125</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>126</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....</b>	<b>127</b>



## **RESUMEN**

El Estado Peruano tiene como su norma fundamental a la Constitución Política del Perú, y es dentro de esa supremacía que posee dicha norma que se presenta la necesidad de implementar la jurisdicción constitucional, dentro de cuyo ejercicio se buscará garantizar el respeto a los derechos fundamentales en cada uno de los fueros que le sean sometidos.

Es precisamente dentro de ese Contexto, que el Tribunal Constitucional se erige en nuestro país como máximo intérprete de la Constitución Política, que conoce a diario diversos casos en los que se alega la vulneración o afectación de derechos fundamentales, los que debe resolver con rectitud, dentro del marco establecido por el Principio de Autonomía Procesal.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la última década viene emitiendo fallos cuanto menos controversiales, en los que dentro de su ejercicio funcional vendría invadiendo o sobrepasando los límites de su competencia, entrando en conflicto incluso con los Poderes del Estado, circunstancia que es objeto de estudio en el presente trabajo de investigación a fin de determinar la eficacia de los límites en el ejercicio de las funciones del Tribunal Constitucional.

## **ABSTRACT**

The Peruvian State has as its fundamental norm the Political Constitution of Peru, and it is within that supremacy that has this norm that the need to implement constitutional jurisdiction is presented, within whose exercise it will seek to guarantee respect for fundamental rights in each of the privileges that are submitted to him.

It is precisely within this Context, that the Constitutional Court is established in our country as the maximum interpreter of the Political Constitution, which knows several cases every day in which it alleges the violation or affectation of fundamental rights, which it must resolve with rectitude, within the framework established by the Principle of Procedural Autonomy.

However, the Constitutional Court in the last decade has been issuing rulings that are less controversial, in which within its functional exercise it would invade or exceed the limits of its competence, entering into conflict even with the Powers of the State, a circumstance that is the object of study in the present research work in order to determine the effectiveness of the limits in the exercise of the functions of the Constitutional Court.

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación está orientada a analizar las funciones del Tribunal Constitucional así como los límites dentro de los que se desenvuelve la misma; ello a fin de esclarecer el escenario que la situación problemática nos plantea respecto a las posibles extralimitaciones en las que ha caído nuestro máximo intérprete de la Constitución.

De este modo, en cuanto al primer capítulo sólo debemos precisar que en él se analizará el objeto de estudio, determinándose el problema e hipótesis planteada; así como se desarrollará la parte metodológica de la presente investigación.

En el Segundo Capítulo se analizará la definición, funciones y demás aspectos fundamentales referidos al Tribunal Constitucional; de igual forma se desarrollará el contenido de la denominada justicia constitucional de la que forma parte el citado organismo.

El Tercer Capítulo ahonda más en el Principio de Autonomía Procesal como directriz establecida para el ejercicio de las funciones del Tribunal Constitucional, entendida como el principio que determina un importante grado de libertad para el Tribunal Constitucional al establecer su Derecho Procesal, desarrollando principios, doctrina jurisprudencial y precedentes vinculantes.

Por su parte en el cuarto capítulo desarrollará más en concreto lo relativo a los límites al Principio de Autonomía Procesal al que hemos aludido.

En el quinto capítulo se realizará el análisis de los resultados obtenidos a partir del estudio de pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias que han sido resaltantes no solo por su contenido doctrinario sino también por su carácter controversial.

# **CAPITULO I**

## **ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO**

## **1.1. UBICACIÓN**

Una de las características de todo el orden jurídico sobre el que se sostiene la justicia en este país es que las decisiones que emiten los órganos jurisdiccionales de todo nivel, es precisamente el de la previsibilidad del contenido de la misma, es decir, que desde antes de emitirse la resolución no sólo los justiciables sino también la comunidad misma sabe cómo se va a resolver, cómo van a resolver los magistrados.

Esta previsión incluso es una garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional, pues deviene en una delimitación en sí misma para que siempre prevalezca el Principio de Congruencia Procesal que no es otra cosa que la sujeción a la ley para poder dar una respuesta al justiciable, no por el imperio que se tiene en el desempeño de la función jurisdiccional, sino en base al contenido de la norma vigente, la jurisprudencia elevada al máximo nivel y los principios del derecho peruano que contienen los postulados de una justicia razonable, predecible y sobre todo representativa de los ideales que como nación siempre debemos tener.

Por esta razón siempre ha sido una de las preocupaciones como estudiante, llegar a establecer si es que los máximos tribunales de justicia de nuestro país en el ejercicio de sus funciones, emiten sus decisiones judiciales dentro de los límites que las propias normas les indican. Con ello queremos establecer, desde esta perspectiva, si hay algunos casos en los que los jueces de diferentes materias llegan a excederse de sus funciones y se pronuncian sobre aspectos que trascienden los límites de sus funciones, y sin duda este aspecto puede presentarse de manera directa en los máximos órganos de justicia de nuestro país, porque de repente, sin darse cuenta y con buena fe, terminan emitiéndose resoluciones que si bien pueden solucionar problemas generales, al final se invaden fueros que se

deben respetar y hay interferencias entre la justicia ordinaria y la justicia especial, como es la emitida por el Tribunal Constitucional

## **1.2. EL PROBLEMA**

Nuestro Tribunal Constitucional ha emitido sentencias muy logradas y que constituyen por su valor académico, modelos de resoluciones que son analizadas positivamente en las facultades de derecho y en muchos ámbitos académicos, sin embargo, ha emitido también otras decisiones que resultan ser controvertidas, recibiendo críticas como aquellas que señalan que pretende invadir funciones reservadas estrictamente al Poder Legislativo e incluso al Poder Ejecutivo o que decide asuntos en controversias destinadas a ser resueltas por el Poder Judicial, al invadir ámbitos de la justicia ordinaria.

Este último aspecto termina creando problemas de legitimidad para decidir y, por supuesto, problema de legitimación por cuanto las decisiones afectadas muy bien pueden ser corregidas desde los poderes públicos y desde la perspectiva de los propios litigantes quienes pueden verse afectados, recurriendo incluso ante organismos internacionales, sin embargo nada de esto pudiera resultar controversial si es que se determinase que en efecto operasen límites en el actuar del Tribunal Constitucional que impidan eficazmente que sus resoluciones trasciendan el ámbito de la función jurisdiccional establecida por ley.

Mal podemos aludir que el Tribunal Constitucional actúa bajo el Principio de la Autonomía Procesal, por una razón sencilla: tiene ante todo un conjunto de normas como es el Código Procesal Constitucional que rige su actuación y que de alguna forma limita su accionar de tal forma que no podemos creer que no existe

delimitaciones establecidas y que el Tribunal Constitucional no considera observar límite alguno en el conocimiento de casos, por lo que es propósito del presente trabajo establecer de qué manera las normas que reglamenta las decisiones del Tribunal existen y resultan eficaces para ejercer una función de control y evitar la arbitrariedad tan presente en nuestras decisiones judiciales, siendo que para ello vamos a abordar el estudio de algunas resoluciones emitidas por el máximo intérprete de la Constitución, a fin de establecer si realmente tal infracción que avasalla competencias se presenta de alguna forma en nuestro país.

### **1.2.1. Formulación del problema**

Por ello el problema en el presente caso queda determinado de la siguiente forma:

¿Bajo qué supuestos, los límites en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales resultan eficaces para evitar la posibilidad de exceso en las decisiones emitidas en casos controversiales por parte del Tribunal Constitucional del Perú?

### **1.2.2. Justificación del Problema**

El presente trabajo encuentra su justificación en la necesidad y en la obligación de garantizar la seguridad jurídica para todos los ciudadanos, de tal manera que cualquier persona dentro del ámbito nacional conozca de antemano cómo va a resolver su Tribunal Constitucional, y esto por una razón sencilla: la previsibilidad o predictibilidad de las resoluciones judiciales, más aún si es que son del máximo Tribunal Peruano, quien no sólo es el supremo intérprete de la Constitución sino también de todas las normas que constituyen la legislación peruana.

La importancia del presente estudio radica en llegar a establecer que un máximo Tribunal como es el que nos ocupa, puede también cometer excesos con el consiguiente efecto negativo que ello origina en la ya mencionada seguridad jurídica y afecta también la credibilidad de las instituciones, más aún si la ciudadanía espera de ellas una respuesta previsible a la luz de las normas, el derecho y la propia jurisprudencia. Y si es verdad que el derecho debe adaptarse a los cambios sociales, también es cierto que dicho cambios antes de que ocurran, ha debido transcurrir algún tiempo que nos permita evaluar la fortaleza de las decisiones y la confianza que deben inspirar las resoluciones que los máximo órganos jurisdiccionales deben emitir.

### **1.3. OBJETIVOS**

#### **1.3.1. Objetivo General**

- ✓ Determinar si los límites que regulan las funciones jurisdiccionales han sido tenidos en cuenta al emitir las decisiones en casos controversiales por parte del Tribunal Constitucional del Perú.

#### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- ✓ Analizar el contenido del concepto de justicia constitucional, así como definir el concepto, características y naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional.
- ✓ Definir el contenido del Principio de Autonomía Procesal y las posturas doctrinarias respecto a su legitimidad.



- ✓ Analizar los límites formales y materiales del Principio de Autonomía Procesal y la labor interpretativa del Tribunal Constitucional.
- ✓ Analizar casos ventilados ante el Tribunal Constitucional, en los que posiblemente se hayan cometido excesos en las decisiones del Tribunal Constitucional Peruano.

#### **1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS**

##### **1.4.1. Formulación de hipótesis**

Si se establecen límites en el ejercicio de la función jurisdiccional, entonces es posible que las decisiones emitidas en casos controversiales por parte del Tribunal Constitucional del Perú resulten corresponderse con el derecho vigente.

#### 1.4.2. Variables e Indicadores

VARIABLES	INDICADORES	SUB INDICADORES	ÍNDICES	TÉCNICAS
VARIABLE INDEPENDIENTE Límites del ejercicio de las funciones jurisdiccionales	Constitucionales Legales Jurisprudenciales Doctrinarios	Debido proceso Derecho a la defensa Legitimación	Presenta No presenta Expresa – no expresa Existe o no desarrollo jurisprudencial	Análisis de datos Fichaje
VARIABLE DEPENDIENTE: Las decisiones emitidas en casos controversiales por parte del Tribunal Constitucional	Derecho Constitucionales Ley Jurisprudencia Doctrina	Debido procedimiento Comunicación a la defensa técnica Ejercicio de derecho material Juez Natural Competencia Legitimación	Correcto Incorrecto Concurre No concurre Necesario Innecesario	Análisis de datos Fichaje

#### 1.4.3. Población y muestra

La población está formada por el total de casos en los que se habría cometido exceso por parte del Tribunal Constitucional.

**CUADRO N° 01: MUESTRA A LA QUE SE VA APLICAR LA  
FICHA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS**

<b>Frecuencia Casos</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
<b>Arancel del cemento</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>Petro audios</b>		
<b>Píldora del día</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>siguiente</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>Testamento de Riva</b>		
<b>Agüero</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>Reingreso de jueces</b>		
<b>y fiscales</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>La condonación de</b>		
<b>la deuda de</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>Panamericana</b>		
<b>El caso El frontón</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>Beto Torres y el</b>	<b>1</b>	<b>12.5</b>
<b>Peculado de Uso</b>		

**Año: 2017**

**Fuente: De investigación**

Se trabajará con sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.

#### **1.4.4. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

- LOS MATERIALES son de carácter bibliográfico y corresponden a autores nacionales como extranjeros.
- LAS FUENTES consultadas pertenecen a la especialidad que corresponde el tema materia de investigación.
- LAS TÉCNICAS A EMPLEAR SON:

##### **Técnica del Fichaje**

Mediante esta técnica se recogerá los datos teóricos, de opinión y de comentario de los textos nacionales y extranjeros.

Su Instrumento serán las fichas bibliográficas, textuales y de comentarios, fichas linkográficas, etc.

##### **Técnica del Análisis de Documentos**

- Esta técnica se ha de emplear para cotejar la información teórica con el contenido de las sentencias que son objeto de estudio.  
El INSTRUMENTO se expresará mediante una ficha de cotejo.
- Los METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS serán el método dogmático para el análisis de las normas jurídicas; así como el método analítico, deductivo, inductivo y de síntesis.
- En lo que respecta a la RECOLECCION DE INFORMACION DE COMPILACION DE DATOS será necesario el empleo de fuentes de información tales como las sentencias que son objeto de estudio.

#### **1.4.5. Métodos y procedimientos para recolección de datos:**

##### **a) Método de Análisis**

El presente método fue empleado por cuanto se ha iniciado el trabajo por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, habiéndose establecido una relación de

causa efecto entre los elementos que componen el objeto materia de investigación.

**b) Método Explicativo:**

Explicar si es que los máximos tribunales de justicia de nuestro país en el ejercicio de sus funciones, emiten sus decisiones judiciales dentro de los límites que las propias normas les indican.

**1.4.6. Análisis estadísticos de los datos.**

Para el análisis de los datos para la contrastación de la hipótesis se empleará la técnica del fichaje a fin de recoger los datos teóricos de los textos nacionales y extranjeros.

Como instrumento se emplearán las fichas bibliográficas, textuales y de comentarios, fichas linkográficas, etc.; asimismo para el procesamiento de datos se utilizará medidas de tendencia central como es la Media Aritmética, determinación de frecuencia simple y frecuencia porcentual.

# **CAPÍTULO II**

## **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL**

## 2.1. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.

Sobre la jurisdicción constitucional Carpizo<sup>1</sup> ha señalado que la configuración de la jurisdicción constitucional, y con ello, de Tribunales o Cortes Constitucionales, es, pese a sus debilidades, problemas y objeciones, el mejor sistema que se ha creado para resguardar la supremacía de la norma fundamental, para controlar a los demás poderes del Estado y para defender los derechos fundamentales, es decir es el mejor defensor del orden constitucional y democrático.

Según Castillo Córdova<sup>2</sup>, las tres razones que justifican la aparición de una jurisdicción constitucional, y de un órgano encargado de ejercerla son: i) Que, a través de un órgano de control de constitucionalidad será posible asegurar la efectiva vigencia de la Constitución, ii) Que, a través de un órgano de la jurisdicción constitucional será posible afianzar una democracia, no sólo formal, sino material, es decir, aquella que se define según los valores y principios que subyacen de la Constitución, en particular la vigencia de los derechos fundamentales; y, iii) Que, a través de un órgano que interpreta la Constitución como máximo órgano de decisión en los asuntos de relevancia constitucional, permitirá mantener en lo posible el consenso en cada momento histórico.

La jurisdicción constitucional defiende y preserva la constitucionalidad, entendida esta como el vínculo de armonía y concordancia plena entre la Constitución y las demás normas que conforman el sistema jurídico que esta diseña. Es una suerte de cordón umbilical que conecta o une los postulados constitucionales con sus

---

<sup>1</sup>CARPIZO, Jorge. *“El Tribunal Constitucional y sus límites”*, Editorial Jurídica Grijley, 2da. Edición, Lima. 2017, p. 1.

<sup>2</sup> CASTILLO CORDOVA, Luis, *“El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial”*, Palestra, 1ra. Edición, Lima, 2008, p. 57.

respectivos correlatos normativos, en sus diversos niveles de especificidad.<sup>3</sup>

Por su parte Iván Escobar Fornos, constitucionalista nicaragüense, define la Justicia Constitucional por su objeto en los siguientes términos: “La Justicia Constitucional tiene por objeto garantizar la supremacía de las normas, derechos y principios de la Constitución. Para tal efecto recurre a los procesos constitucionales: Inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, el amparo, el habeas corpus y el habeas data, tribunal Constitucional”<sup>4</sup>.

Asimismo, Néstor Pedro Sagüés ha señalado que para que existe un sistema de control constitucional es necesario que exista: i) una Constitución total o parcialmente rígida, y ii) un órgano estatal independiente y autónomo que desarrolle el control de constitucionalidad con facultad decisoria dentro de plazos determinados<sup>5</sup>.

## **2.2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.**

Regularmente se considera a Hans Kelsen como el creador del Tribunal Constitucional, un órgano distinto, tanto del poder político como de la jurisdicción ordinaria, especializado para el control de la constitucionalidad normativa.

También suele afirmarse que este órgano, que realiza la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en un proceso

---

<sup>3</sup> BLUME FORTINI, Ernesto. *‘El tribunal constitucional peruano como supremo intérprete de la constitución’*. Ensayo elaborado a raíz de los estudios realizados por el autor en la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Escuela de Graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p.129.Consulta: 20 de marzo del 2017. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085306.pdf>.

<sup>4</sup> CASTRO RIVERA, Edwin y Sergio J. CUAREZMA TERÁN. (Directores). *‘A 21 años de la Constitución Política: Vigencia y desafíos’*. Managua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 2008, pág. 96.

<sup>5</sup> SAGÜÉS, Néstor Pedro, *“Derecho procesal constitucional”*, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 30.



especial dirigido a este fin y con efectos derogatorios, fue instalado por primera vez en Austria. Quizá por eso el control constitucional realizado a través de este mecanismo suele ser denominado también “sistema austríaco”<sup>6</sup>.

### **2.2.1. Características del Tribunal Constitucional.**

Las características de los tribunales constitucionales según el reconocido Javier Pérez Royo<sup>7</sup>, son:

- Es un órgano único, en el que se concreta la interpretación definitiva y vinculante de la Constitución.
- Es un órgano jurisdiccional, aunque no integrado en el Poder Judicial.
- Su competencia básica consiste en el control constitucional de las leyes.
- Sus competencias adicionales van en la misma dirección: protección de los derechos fundamentales, protección de la distribución territorial del poder y, protección de la división de poderes.

---

<sup>6</sup> BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. “*Introducción al Derecho Constitucional comparado*”. Editorial del Fondo de la Cultura Económica. México D. F. 1996, p. 167.

<sup>7</sup>PÉREZ ROYO, Javier, “*Curso de Derecho Constitucional*”. Marcial Pons, Quinta Edición, Madrid, 1998.p. 925.

## **2.2.2. Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional.**

### **2.2.2.1. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional.**

César Landa señala que, los órganos constitucionales cuentan con una configuración que les viene dada directamente por la propia Constitución, y cuyo reconocimiento no se limita a la simple mención de sus funciones o competencias, sino que en muchos casos la propia norma fundamental establece su composición, estructura, funciones, entre otros. En otras palabras, reciben de la Constitución todos los atributos esenciales de su condición y posición en el sistema constitucional. Sin embargo, esto no impide que el legislador pueda completar, a través de su ley orgánica, los elementos no esenciales o complementarios, y en muchos casos, estos órganos constitucionales están en la capacidad de emitir sus propias normas para regularse<sup>8</sup>.

Conforme a la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la misma, conforme se señala en el artículo 202 le reconoce competencia al Tribunal Constitucional para: *“1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley”*.

La supremacía del Tribunal Constitucional es explicada por el maestro Jorge Carpizo, quien realizando la diferencia existente entre órganos constituidos primarios y secundarios, señala lo

---

<sup>8</sup>LANDA ARROYO, César. *“Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional”*. Palestra Editores, Primera Edición, Lima 2011.p. 17.

siguiente: “Los poderes constituidos creados por la Constitución son: el poder revisor de ésta y el tribunal constitucional, donde ellos existan, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los órganos constitucionales autónomos. No obstante, ellos no tienen la misma jerarquía constitucional. (...) Todos son constituidos porque se crean en la Constitución, pero los primarios gozan de una jerarquía superior respecto a los secundarios, debido a la naturaleza de sus funciones (...) en virtud de que pueden alterar su estructura, integración y funciones de los segundos, e incluso los pueden crear (...) El tribunal constitucional es jerárquicamente superior o goza de esa competencia superior a los poderes u órganos secundarios debido a que es quien controla la constitucionalidad de sus normas y actos. Si no gozara de jerarquía superior, el tribunal constitucional no podría revisar, declarar inválidos o anular los actos de los órganos secundarios.”<sup>9</sup>

#### **2.2.2.2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional**

Ferrer Mac-Gregor define al Tribunal Constitucional como el “órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental<sup>10</sup>.

En nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional no se ubica dentro de la estructura y organización del Poder Judicial; sino que le reconoce un régimen constitucional propio. Esto responde, a la necesidad de otorgarle mayor autonomía e independencia en relación con el Poder Ejecutivo, Legislativo y

---

<sup>9</sup>CARPIZO, Jorge. *‘El Tribunal Constitucional y sus límites’*. Ob. Cit. pp. 29-30.

<sup>10</sup>FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *“Ensayos sobre derecho Procesal Constitucional”*, México, Porrúa y CNDH, 2004, p. 37.

Judicial, y demás órganos constitucionales<sup>11</sup> que son objeto de control; sin embargo ello no le niega naturaleza jurisdiccional, pues conforme a su artículo 202º, le reconoce la competencia para conocer en instancia única los procesos de inconstitucionalidad; en última y definitiva instancia las resoluciones judiciales denegatorias de los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y la acción de cumplimiento; y, finalmente, los conflictos de competencia.

### **2.2.2.3. Tribunal Constitucional como órgano político**

Alfonso Santiago señala que los órganos de control de la constitucionalidad “ejercen poder político ya que hacen prevalecer su decisión sobre lo dispuesto por el Poder Ejecutivo o Legislativo” y que la imposición “frente a los otros detentadores del poder, es en realidad una decisión política”<sup>12</sup>.

Por su parte Leibholz señalaba que “bajo cada litigio Constitucional se esconde una cuestión política susceptible de convertirse en un problema de poder”<sup>13</sup>.

## **2.3. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ.**

El Tribunal Constitucional peruano es definido por su Ley Orgánica como el órgano supremo de interpretación y control de la

---

<sup>11</sup>FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José. *“La justicia constitucional europea ante el siglo XXI”*. Ed. Tecnos, Madrid, 2002. p. 50.

<sup>12</sup>Citado por: GARCÍA TOMA, Víctor. *“Teoría del Estado y Derecho Constitucional”*. 1ra Edición. Palestra Editores, Lima, 2005. p.523.

<sup>13</sup> LEIBHOLZ, Gerhard, “Problemas fundamentales de la democracia moderna”, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, p. 149. Citado por: LANDA ARROYO, César. “Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional”. Ob. cit. p. 44.

constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales<sup>14</sup>.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional es “una institución de diálogo social y de construcción pacífica de la sociedad plural, pues participa como un auténtico órgano con sentido social, estableciendo a través de su jurisprudencia, las pautas por las que ha de recorrer la sociedad”<sup>15</sup>.

### **2.3.1. Funciones y Atribuciones del Tribunal Constitucional**

#### **2.3.1.1. Competencias en los procesos constitucionales**

El artículo 202 de la Constitución de 1993 establece taxativamente las tres competencias del Tribunal Constitucional del Perú:

- i. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
- ii. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.
- iii. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

Los procesos constitucionales, se clasifican, en atención al objeto de protección de cada uno de ellos, en tres grupos:

- a) Procesos de tutela de derechos: Llamados también procesos constitucionales de la libertad, tienen por

---

<sup>14</sup> Artículo 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

<sup>15</sup>STC N° 00048-2004-AI, Fj. 3 y 7.

objeto la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, estos son: proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento (acción de cumplimiento).

b) Procesos de control normativo: Denominados también procesos constitucionales orgánicos, tienen por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución respecto a las normas que tienen rango de Ley, en el caso del proceso inconstitucionalidad, y de la primacía de la Constitución y de la ley respecto al resto de normas de jerarquía inferior a la ley, en el caso del proceso de acción popular.

c) Proceso de conflicto competencial: Que tiene por objeto la protección de las competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes del Estado, órganos constitucionales y a los gobiernos regionales y locales (municipalidades). Esta comprendido por el proceso de conflicto de competencias o de atribuciones.

#### **2.3.1.2. Competencias exclusivas**

En el Perú, son tres las competencias exclusivas que ejerce nuestro Tribunal Constitucional:

1. Conocer y resolver en única y definitiva instancia, la acción de inconstitucionalidad;

1.1. Como órgano de control de la Constitución o de una norma constitucional.

1.2. como órgano de control de una reforma constitucional

1.3. como órgano de control de Tratados Internacionales.

2. Conocer y resolver en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento.

En este sentido los Tribunales Constitucionales intervienen como última instancia en algunos procesos constitucionales. Lo interesante de este sistema es que, si una sentencia no es seleccionada, cualquier magistrado de la Corte Constitucional o el Defensor del Pueblo pueden insistir en su revisión, lo que no obliga a la Sala de Selección a elegir la sentencia para su revisión<sup>16</sup>.

3. Conocer y resolver los conflictos de competencia.

El artículo 202 inciso 3° de la Constitución, señala que corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a la ley. En cuanto a las instituciones entre las cuales se puede suscitar un conflicto competencias o de atribuciones, el artículo 46 de la LOTC, precisa que puede darse entre los poderes del Estado, entre los órganos constitucionales, entre éstos entre sí, entre los gobiernos regionales o municipales, entre el Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipalidades y entre éstos entre sí.

En cuanto a la clasificación de los procesos competenciales, la STC N° 006-2006- CC/TC ha señalado que pueden ser básicamente de dos tipos: i) El proceso competencial

---

<sup>16</sup> HUERTA GUERRERO, Luís Alberto, "El Tribunal Constitucional del Perú (Apuntes para una reforma de sus competencias)". En Las tareas de la transición democrática. Serie: Democracia N° 01. Comisión Andina de Juristas, Lima, 2001. p.194.

puro, que se produce cuando el conflicto de competencias se produce entre diversos niveles de gobierno; entre el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales; su marco normativo se encuentra en los artículos 191, 192 y 197 de la Constitución, Ley Orgánica de Gobiernos regionales, Ley Orgánica de Municipalidades y Ley de Bases de la Descentralización; y, ii) El proceso competencial de atribuciones, que se produce cuando se debe dirimir las competencias que les corresponde a los Poderes del Estado frente a los que les corresponde a diferentes Órganos Constitucionales.

Asimismo, el artículo 3 de la LOTC señala que en ningún caso se puede promover un proceso de esta naturaleza respecto a las funciones asignadas al TC, lo que resulta acertado, porque si se asumiera tal posibilidad, el TC se convertiría en juez y parte.

#### **2.3.1.3. Competencias compartidas**

##### **El control difuso de las normas legales**

En artículo 138° de la Constitución señala que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. Asimismo el artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que: “De conformidad con el Artículo 236 (de la Constitución de 1979), cuando los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.



Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece.”.

Por su parte, el artículo 3° del Código Procesal Constitucional señala que: “Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio alguno. En todos estos casos, los Jueces se limitan a declarar la inaplicación de la norma por incompatibilidad inconstitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, realizando interpretación constitucional, conforme a la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de menor jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso de acción popular. La consulta a que hace alusión el presente artículo se hace en interés de la ley”.

#### **2.3.1.4. Competencias no previstas e implícitas**

Entre ellas tenemos:

- ✓ Proceso de inconstitucionalidad por omisión.
- ✓ Control de constitucionalidad de normas infralegales.
- ✓ El control previo de tratados.
- ✓ El control de los decretos que declaran estados de excepción.
- ✓ El control del procedimiento de reforma constitucional.
- ✓ El control constitucional de los proyectos de ley observados por el Poder Ejecutivo.
- ✓ El control constitucional a las convocatorias a consultas populares y plebiscitos.
- ✓ El control constitucional de la actuación de partidos políticos.

#### **2.3.1.5. Votación y Publicación de las Decisiones del Tribunal Constitucional**

Los sistemas de votación y publicación de las decisiones del Tribunal Constitucional se encuentran recogidas en el artículo 47 del Reglamento Normativo, en el cual se establecen los siguientes tipos de resoluciones que pueden ser emitidas por el Tribunal Constitucional.

1. Sentencias.- Son las resoluciones por medio de las cuales se pone fin a los procesos constitucionales, a través de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La sentencia debe contener las formalidades señaladas en los artículos 17, 34, 55 y 72 del Código Procesal Constitucional. Las sentencias expedidas por el Pleno deben ser firmadas por el número mínimo de magistrados exigidos por la ley, es decir, requieren de 5 votos. Los casos en los que el Pleno dicta sentencia son: las acciones de inconstitucionalidad, el conflicto de competencia, y el establecimiento o modificación de precedentes normativos y

doctrina jurisprudencial.

En el caso de las sentencias expedidas por las Salas, deben contar con 3 votos conformes. En ambos casos, los efectos de la sentencia empiezan a regir desde el día siguiente a su notificación y, en su caso, al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, independientemente de su publicación en la página web del Tribunal Constitucional.

2. Autos. - Son las resoluciones de carácter interlocutorio por medio de las cuales el Tribunal emite pronunciamientos en las causas que están sometidas a su conocimiento, es decir, son aquellas resoluciones que no resuelven el fondo del petitorio de la demanda. Por ejemplo, los autos que resuelven la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o del conflicto de competencia, los autos que declaran la improcedencia de la demanda en los demás procesos constitucionales elevados al Tribunal vía recurso de agravio constitucional, la indebida concesión del recurso de agravio constitucional, el recurso de queja, la acumulación de procesos y, los pedidos de aclaración, entre otros.

3. Decretos. - Son las resoluciones por medio de las cuales se impulsa el trámite del proceso. Estas resoluciones son firmadas por el Presidente del Tribunal o por delegación de éste, por los Presidentes de las Salas. A diferencia de las sentencias y los autos, los decretos no son publicados en la página web del Tribunal, a excepción de los decretos de avocamiento, que se dictan cuando uno o más magistrados han cesado en sus funciones, en cuyo caso el Presidente del Tribunal Constitucional, el de las Salas, o en su defecto el Magistrado más antiguo, según corresponda, emitirá decreto señalando al magistrado que se

avoca al conocimiento de la causa, siempre que el cesado no haya votado.

## **2.3.2. Alcances sobre la Jurisdicción Constitucional en Legislación Comparada**

### **2.3.2.1. El tribunal constitucional en Alemania**

El artículo 1° de la BVerfGG describe al Tribunal Constitucional de la siguiente manera: "El Tribunal Constitucional Federal es un tribunal de la Federación, autónomo e independiente frente a los demás órganos constitucionales"<sup>17</sup>.

El Tribunal Constitucional Federal tiene en la ley una doble configuración<sup>18</sup>:

- ✓ Como Órgano Constitucional: Está situado al mismo nivel que la Asamblea Federal, Consejo Federal y el Gobierno Federal, no encontrándose subordinado a ningún otro órgano estatal, por lo cual no depende organizativamente de ningún ministerio, no está sometido a ningún tipo de vigilancia sobre su personal ni a intervención estatal directa, elabora su propio presupuesto y además sus jueces tienen un estatuto peculiar distinto de los demás jueces federales.
- ✓ Como Tribunal judicial: El artículo 92 de la Ley Fundamental integra al Tribunal Constitucional Federal al Poder Judicial<sup>19</sup>. Se han presentado algunas objeciones acerca del carácter de sus decisiones, ya que en ocasiones éstas son más políticas que jurisprudenciales, pero su carácter institucional de Tribunal es indiscutible ya que "mediante jueces imparciales, especialmente independientes

---

<sup>17</sup> Ley del Tribunal Constitucional Federal, del 16 de abril de 1951, art. 1.

<sup>18</sup> CERVANTES, Luis. *"Los tribunales constitucionales en el derecho comparado: Un estudio introductorio sobre sus antecedentes y situación jurídica actual."* Estudios básicos de Derechos Humanos, VI. San José, IDH, 1996. p. 375-376.

<sup>19</sup> Ley Fundamental de la República Federal Alemana, art. 92.

(independencia judicial) decide vinculantemente y, en base a (sic) normas jurídicas, lo que es conforme a derecho en cada caso”.

#### **2.3.2.2. La Corte Constitucional en Italia**

La Corte Constitucional no ha sido instituida para sustituir alguno de los otros órganos jurisdiccionales ya existentes, ni sustraer a éstos parte de las funciones que entran dentro de su competencia. La Corte Constitucional desarrolla su actividad sobre materias que hasta ahora estaban totalmente fuera del campo jurisdiccional, o bien se atribuían a la competencia de especialísimos órganos jurisdiccionales que actualmente ya no existen. La institución de la Corte Constitucional representa, por lo tanto, una extensión de la actividad jurisdiccional del Estado, extensión que caracteriza el progreso constante del ordenamiento jurídico en los tiempos modernos<sup>20</sup>.

Este órgano realiza una función de tipo negativo abrogativo- que obliga a anular una ley, no para sustituirla por una considerada políticamente más conveniente sino porque la misma contradice un canon constitucional que debe ser respetado. Esto es, una anulación por causas estrictamente jurídicas.

De acuerdo a lo opinado por Pizzorusso, las normas de organización de dicho tribunal lo perfilan como un órgano que muestra junto con características propias de los órganos judiciales algunas otras peculiares de los de tipo parlamentario, como lo es el papel de mediador o árbitro en los conflictos de atribuciones: En este sentido resulta evidente la intención de los legisladores por

---

<sup>20</sup> VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. El control de la constitucionalidad de la ley, Estudio de derecho comparado. México, Editorial Porrúa, S.A., 1978.pp. 72-73.

establecer un órgano que estuviese en condiciones de garantizar el respeto efectivo de los derechos fundamentales del ciudadano- de los sujetos de derecho individuales o colectivos, en general- y que fuese, al tiempo, una instancia capaz de desarrollar un papel arbitral en los conflictos entre órganos y entes constitucionales<sup>21</sup>.

### **2.3.2.3. El Tribunal Constitucional de España**

El Tribunal Constitucional se encuadra como una jurisdicción de naturaleza especial, pues el mismo no se encuentra ubicado dentro de la común organización judicial, sino que la Constitución de 1978, la cual le dio origen, lo sitúa como un órgano fuera de la estructura del mencionado poder. Es por ello que para algunos autores tales como Eduardo García de Enterría y Jesús González Pérez, el Tribunal viene a ser un súper poder o un verdadero cuarto poder, materialmente jurisdiccional pero distinto del Poder judicial estricto<sup>22</sup>.

Respecto a la naturaleza de la actividad que el Tribunal Constitucional Español ha de desempeñar, el propio Tribunal se ha encargado de aclarar que no es un órgano político (STC 194/1989, de 16 de noviembre, FJ 2). Por el contrario, por más que no forma parte del poder judicial, el Tribunal Constitucional se configura en la Constitución como un órgano de carácter jurisdiccional (ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2); y pese a que está llamado a desempeñar una tarea de contrapoder, de límite o freno de los restantes poderes en aras de la supremacía de la Constitución, su tarea consiste en resolver las controversias que se le planteen mediante decisiones jurídicas, guiadas por la razón del Derecho y no por el criterio político<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> PIZZORUSSO, Alessandro. *“Lecciones de derecho Constitucional”*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 3 Ed. 1. II, 1987. pp 3-4.

<sup>22</sup> CERVANTES, Luis. *“Los tribunales constitucionales en el derecho comparado: Un estudio introductorio sobre sus antecedentes y situación jurídica actual.”* Ob. Cit. pp.381-382.

<sup>23</sup> El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a diferentes niveles España:

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que<sup>24</sup>:

1. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.

2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

Al respecto, Francisco Fernández Segado citado por Luis Cervantes, opina que: "Si, en efecto, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, no es el único sino, precisamente, sólo el "supremo". Y, en efecto, (...) la jurisdicción Constitucional no es, ni mucho menos, la única en aplicar los preceptos constitucionales (...) ya que, de hecho, sólo conocerá en exclusiva de los recursos directos de inconstitucionalidad, esto es, del control abstracto de normas legales"<sup>25</sup>.

Igualmente se ha señalado que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, de carácter constitucional, independiente, único y exclusivo en su orden, y que va a tener como función la de imponer y actuar las sanciones que correspondan en el orden constitucional, en garantía de la observancia de la norma jurídica<sup>26</sup>.

---

El Tribunal Constitucional.p.2. Consulta 02 de enero del 2017: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS\\_STU\(2017\)593506\\_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf)

<sup>24</sup> Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Nº 2 del 3 de Octubre de 1979. Art. 1.

<sup>25</sup> CERVANTES, Luis. *"Los tribunales constitucionales en el derecho comparado: Un estudio introductorio sobre sus antecedentes y situación jurídica actual."* Ob. Cit.p.383.

<sup>26</sup> PÉREZ GORDO, Alfonso. *"El Tribunal Constitucional y sus funciones"*. Barcelona. Ed. Bosch, 1982, pág. 11.



#### **2.3.2.4. La Corte Constitucional en Colombia**

La Corte Constitucional está integrada de nueve magistrados, según determina la Ley N° 5 de 1992 y la Ley 270, Estatutaria de la Administración de Justicia, los cuales son nombrados por el Senado, uno de cada una de las tres ternas presentadas por el Presidente de la República; uno de cada una de las tres ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia y uno de cada una de las tres ternas presentadas por el Consejo de Estado, según dispone el artículo 44 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de 1996. La normativa impide que sean nombrados magistrados de la Corte Constitucional a quienes durante el año precedente a la elección, hayan ejercido los cargos de Ministro de Estado, Magistrado de la Corte Suprema o del Consejo de Estado<sup>27</sup>.

Por otro lado el artículo 243 de la Constitución Colombiana determina que los fallos de la Corte Constitucional producen cosa juzgada constitucional. Asimismo la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 47 precisa que tales fallos se publican en la Gaceta de la Corte Constitucional, la que debe publicarse mensualmente por la Imprenta Nacional. El artículo 48 de la Ley analizada precisa Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con

---

<sup>27</sup>NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. (2003). “*Los Tribunales Constitucionales de Sudamérica a Principios Del Siglo XXI*”. *Ius et Praxis*, 9(2), pp. 59-131. Consulta: 17 de enero de 2017. <<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000200003>>

efecto erga omnes en su parte resolutive. La parte motivaconstituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho engeneral. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general.

2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorioúnicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.

#### **2.3.2.5. El Tribunal de Garantías Constitucionales en Ecuador**

La Corte Constitucional se integra por nueve miembros, los que forman el Pleno, que es el único órgano decisorio de la Corte Constitucional. Hasta la Constitución de 1998, en el Tribunal Constitucional funcionaba el Pleno y Salas, integradas por tres vocales cada una, las que podían decidir ciertas causas. Las salas desaparecen con la publicación de la nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aunque conforme a las denominadas Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición sólo tenían un carácter meramente informativo (artículos 429, inc. 2o., 432 CE, 11 y 13, RPCC). Asimismo el número de nueve jueces es el mismo que tenía el anterior Tribunal Constitucional, y que fue establecido desde las reformas constitucionales de 1995, pues con anterioridad su número era de once miembros<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> SALGADO PESANTES, Hernán y OYARTE MARTÍNEZ, Rafael. *'El Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en Ecuador'*, Biblioteca jurídica virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp.436-437. Consulta: 02 de febrero del 2017. <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/52.pdf>>

#### **2.3.2.6. Tribunal de Control de Constitucionalidad de Guatemala**

La Corte de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares, los cuales son nombrados por el Congreso, sobre la designación de un miembro titular que corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno al pleno del Congreso de la República; uno al Presidente de la República en Consejo de Ministros, uno al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos; y uno a la asamblea del Colegio de Abogados, según determina el artículo 269 de la Constitución.

En cuanto al procedimiento interno para la designación del respectivo magistrado por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, se realiza a través de una convocatoria específica y por mayoría absoluta de votos, según determina el art. 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad (LAEPC). En el caso del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y de la Asamblea del Colegio de Abogados, la designación se realiza por mayoría absoluta de los miembros presentes en votación secreta y no existe delegación de voto.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. *‘La integración y estatuto jurídico de los magistrados de los tribunales constitucionales de Latinoamérica’*. Estudios Constitucionales, vol. 6, núm. 1, 2008, p. 288, ISSN 0718-0195; Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, pp.281-286. Consulta: 20 de marzo del 2017. <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82060113>>

# **CAPÍTULO III**

## **EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL**

### 3.1. AUTONOMÍA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El artículo 201° de la Constitución Política del Estado, establece que ‘El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Dicho texto se encuentra también en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobado por Ley N° 28301, esto es que sus competencias y atribuciones no dependen de ningún órgano constitucional, sometiéndose únicamente a la Constitución y a su Ley Orgánica. Tal autonomía, como es evidente, está referida a la potestad constitucional del Tribunal para definir su gobierno y la gestión jurisdiccional –autonomía administrativo-jurisdiccional–, así como a la autonomía en su relación con los poderes del Estado y órganos constitucionales–autonomía funcional– y a su facultad para llenar los vacíos y deficiencias legislativas procesales –autonomía procesal–”<sup>30</sup>.

#### 3.1.1. Autonomía Institucional

Según Acuña Chávez<sup>31</sup>, cuando hablamos de autonomía como garantía institucional nos debemos referir al artículo 201° de la Constitución, que señala que el Tribunal Constitucional “*es el órgano de control de la Constitución*” y además es “*autónomo*”.

La ‘garantía institucional’ nos dice Cidoncha Martín, es una categoría acuñada en los años veinte por la doctrina alemana, con la que se persigue la protección frente al legislador de determinadas instituciones que se recogen *in nuce* en la Constitución. La garantía institucional vendría a ser aquella protección constitucional que preserva a una institución no sólo de

---

<sup>30</sup> STC Exp. N° 10340-2006-PA/TC, f. j. 2

<sup>31</sup> ACUÑA CHAVEZ, Araceli. “*Funciones y Competencias del Tribunal Constitucional Peruano*”. Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2014. p.96

su destrucción, sino de sudesnaturalización, al prohibir vulnerar su imagen maestra («Leit-Bild»). Éste es su significado típico, que en un principio se circunscribe a instituciones públicas (instituciones en sentido estricto —se habla así de garantías «institucionales» o garantías «de institución»—), pero que después se proyecta sobre instituciones privadas (institutos —se habla así de garantías «de instituto»—) e incluso sobre determinadas manifestaciones sociales (se habla así de garantías de instituciones sociales)<sup>32</sup>.”

El Tribunal Constitucional ha referido que con el concepto garantía institucional la doctrina y jurisprudencia comparadas aluden a la institucionalización de ciertas instituciones que se consideran componentes esenciales del ordenamiento jurídico, de manera tal que la institución semantenga «en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social de cada tiempo y lugar».<sup>33</sup>

Puede concluirse entonces que *‘la autonomía del Tribunal Constitucional como aquella garantía institucional mediante la cual se protege el funcionamiento del Tribunal Constitucional con plena libertad en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos, entre otros, de modo que en los asuntos que le asigna la Constitución pueda ejercer libremente las potestades necesarias para garantizar su autogobierno, así como el cumplimiento de sus competencias. Ello implica además que los poderes del Estado u órganos constitucionales no pueden desnaturalizar las funciones asignadas al Tribunal Constitucional en tanto órgano de control de la Constitución’*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>CIDONCHA MARTÍN, Antonio. ‘Garantía institucional, dimensión institucional y derecho fundamental: balance jurisprudencial’. Biblioteca jurídica virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, p.150. Consulta: 02 de abril del 2017. <<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/23/est/est5.pdf>>

<sup>33</sup> STC Exp. N° 00013-2003-PI/TC, f. j. 6.

<sup>34</sup>ACUÑA CHAVEZ, Araceli. “Funciones y Competencias del Tribunal Constitucional Peruano” (...) Ob. cit.p.97.

### 3.1.2. Autonomía normativa

La autonomía normativa puede ser interna y externa<sup>35</sup>. La **interna** se encuentra prescrita en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional bajo los siguientes términos: *“El Tribunal puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como sobre el régimen de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbito de la presente Ley. Dichos reglamentos, una vez aprobados por el pleno del Tribunal y autorizados por su Presidente, se publican en el Diario Oficial El Peruano”*.

A través de dicho dispositivo se le delega al Tribunal Constitucional la potestad de reglamentar su propio funcionamiento, habiendo ejercido el Tribunal Constitucional dicha facultad, al aprobar en sesión del 14 de setiembre del 2004, el Reglamento Normativo correspondiente a su funcionamiento y al régimen de trabajo de su personal y servidores, expresando en su parte considerativa, que el dictado de dichas disposiciones se realiza a fin de reordenar y mejorar aspectos jurisdiccionales en procura que los procesos constitucionales puedan ser resueltos en el menor tiempo posible.

La autonomía normativa **externa** la encontramos consagrada en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que señala *“(…) el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.”* El dispositivo descrito recoge el denominado principio de elasticidad o ductilidad de las normas procesales, facultando al Tribunal Constitucional para poder desarrollar y complementar la regulación procesal constitucional en el marco

---

<sup>35</sup>IBÍDEM, p. 97.

de los principios generales del derecho constitucional material y de los fines de los procesos constitucionales, facultad que se justifica dado que la falta de regulación de algún supuesto por parte de la ley procesal constitucional no puede ser un obstáculo para que los procesos constitucionales cumplan con la finalidad de defender la primacía de la Constitución y tutelar los derechos fundamentales.

En el Perú, la autonomía procesal ha sido definida como un principio que ‘establece una potestad del juez constitucional para la interpretación e integración de las normas constitucionales’.<sup>36</sup> El ex magistrado del Tribunal Constitucional Landa Arroyo, define a la autonomía procesal como un principio que ‘le ha permitido (al Tribunal Constitucional), en pocas ocasiones, hacer dúctil el Derecho y los procesos constitucionales’ a fin de alcanzar los fines constitucionales de los mismos: la defensa de la primacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales’<sup>37</sup>. Por su parte, Figueroa Gutarra, la define como la ‘facultad de los jueces constitucionales para superar determinadas limitaciones formales del proceso y proponer decisiones que respondan a un contexto de urgencia, inmediatez y pronta restitución de los derechos fundamentales conculcados’<sup>38</sup>.

Se puede concluir entonces que en resumidas cuentas por el principio de autonomía procesal, el Tribunal tendrá la posibilidad de desarrollar o reconstruir las normas constitucionales procesales así como las sustantivas de ser el caso, cuando las

---

<sup>36</sup> MENDOZA ESCALANTE, Mijail. “La autonomía procesal constitucional”. Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina, II, 4 (julio-diciembre 2006), p. 97. Lima: Palestra Editores, 2007.

<sup>37</sup> LANDA ARROYO, César. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú”. Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina, II, 4 (julio-diciembre 2006), Palestra Editores, Lima, 2007. p. 64.

<sup>38</sup> FIGUEROA GUTARRA, Edwin. ‘El principio de autonomía procesal. Notas para su aplicación material’. En Pensamiento Constitucional, N° 19, 2014. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2015. p. 332.



demás normas y los tradicionales métodos de interpretación e integración del Derecho, se tornen insuficientes; no obstante atendiendo a que ningún poder es ilimitado, esta misma autonomía del Tribunal Constitucional así como es atribuida por la Constitución, también viene limitada por ésta, de modo que el ejercicio de sus respectivas competencias no puede desvincularse ni parcial ni totalmente del ordenamiento jurídico.

### **3.2. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O UN EXCESO EN EL USO DE SUS FACULTADES Y LA APLICACIÓN DE SUS DECISIONES.**

#### **3.2.1. El Neoconstitucionalismo y el Principio de Autonomía Procesal.**

Prieto Sanchis señala que el “Neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporáneo o, a veces también, constitucionalismo a secas son expresiones o rúbricas de uso cada día más difundido y que se aplican de un modo un tanto confuso para aludir a distintos aspectos de una presuntamente nueva cultura jurídica. Creo que son tres las acepciones principales. En primer lugar, el constitucionalismo puede encarnar un cierto tipo de Estado de Derecho, designando, por tanto, el modelo institucional de una determinada forma de organización política. En segundo término, el constitucionalismo es también una teoría del Derecho, más concretamente aquella teoría apta para explicar las características de dicho modelo. Finalmente, por constitucionalismo cabe entender también la ideología que justifica o defiende la fórmula política así designada<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> PRIETO SÁNCHEZ, Luis. “*Neoconstitucionalismo y ponderación judicial*.” Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001. p. 201.

Agrega el autor que el Neoconstitucionalismo “es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: la tradición norteamericana originaria que concibe a la Constitución como regla de juego de la competencia social y política; y la de la revolución francesa, que concibe a la Constitución como un proyecto político bastante bien articulado. El neoconstitucionalismo reúne elementos de las dos tradiciones: de un fuerte contenido normativo y de garantías jurisdiccionales. Entonces solemos hablar de “*constituciones normativas garantizadas*”<sup>40</sup>.

Así los rasgos distintivos de esta corriente son, la existencia de más principios que reglas, más ponderación que subsunción, omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar de espacios exentos, coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica, omnipotencia del juez en lugar de autonomía del legislador ordinario.

Sobre esto último Schmitt citado por Hernández Castellanos, afirma que “*la última palabra la pronuncia el juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas*” y que vivimos en un Estado jurisdiccional, en el cual el poder de los jueces, al interpretar la Constitución, se refuerza en grado máximo cuando éstos ejercen la atribución de definir y resolver los conflictos jurídicos desde la lectura de los valores que informa la Constitución, por sobre las tareas interpretativas del legislador”<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>Ibíd. p. 202.

<sup>41</sup> HERNÁNDEZ CASTELLANOS, Donovan Adrián. “*Idea del Estado en Carl Schmitt Aportes para una genealogía de lo político*”. Argumentos (Méx.) México, v. 23, p. 125, dic. 2010. Consulta: 17 de marzo de 2017. <[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0187-57952010000300005&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300005&lng=es&nrm=iso)>

Bajo estos parámetros nuestro Tribunal Constitucional pretende legitimar una serie de nuevas competencias en el ejercicio de sus funciones de máximo intérprete de la Constitución, tal es el caso del Principio de Autonomía Procesal, el cual ha suscitado no sólo posiciones a favor sino también fundados cuestionamientos, lo cuales serán desarrollados a continuación.

### **3.2.2. Definición del Principio de Autonomía Procesal.**

Patricia Rodríguez Patrón sostiene que este principio tuvo su origen en la jurisprudencia constitucional alemana que, debido a ciertas indeterminaciones o vacíos dentro de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, se vio obligado a recurrir a “esta capacidad para la creación de principios y reglas procesales propias que supone una “complementación judicial de la ley” en el seno de un proceso concreto<sup>42</sup>.

Haberle señala que “la autonomización del Derecho procesal constitucional ha llegado a tal punto frente a otras normas procesales, que parece imprescindible frente a las tareas de la legislación constitucional, según la Ley Fundamental y la Ley del Tribunal Constitucional. El Derecho procesal constitucional no sólo debe ser entendido técnicamente. El Tribunal Constitucional ha desarrollado grandes logros en el refinamiento de los instrumentos de información y de participación: en el sentido de “información a través del pluralismo”. También es ejemplar el uso de los métodos de interpretación frente a la casuística, la flexibilidad, la falta de desarrollo doctrinario y de su adaptación al

---

<sup>42</sup> RODRÍGUEZ PATRÓN, Patricia, “*La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal*”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21, Nº 62, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. p. 129.

asunto del Derecho procesal constitucional, sin que ello vaya en desmedro de los principios y los tópicos recurrentes y sin que el costo signifique tendencias de ablandamiento. Lo mismo vale para la interpretación integral procesal interna de las normas particulares de la Ley del Tribunal Constitucional. Cabe destacar especialmente los efectos retroactivos de las normas de la Ley del Tribunal Constitucional sobre la interpretación de la Ley Fundamental<sup>43</sup>.

Patricia Rodríguez Patrón define a la autonomía procesal como “el perfeccionamiento jurisdiccional que de su regulación procesal realiza el TC, más allá de los métodos convencionales de interpretación e integración del derecho (cuando estos se revelan insuficientes dada la especialidad del proceso constitucional). A través de ella, el TC, en el seno de procesos concretos, crea reglas y principios procesales generales más o menos estables, de acuerdo con consideraciones de oportunidad”<sup>44</sup>.

Mijail Mendoza define la autonomía procesal constitucional diciendo que es un principio que establece una potestad del juez constitucional para la interpretación e integración de las normas constitucionales. Sin embargo, más adelante el autor varía su definición sustancialmente y afirma: la autonomía procesal constitucional viene a ser la potestad de creación judicial de derecho procesal constitucional por el Tribunal Constitucional<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> HÄBERLE, Peter. *“Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar”*. Lima: Palestra-Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 2004. pp. 49 y 50. Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 2007.

<sup>44</sup> RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia. *“La autonomía procesal del Tribunal Constitucional”*, Madrid: Civitas, 2003, p. 141.

<sup>45</sup> En mayo de 2007 se realizó en Huancayo el II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional “Héctor Fix Zamudio”. En él se reunieron los constitucionalistas peruanos que tienen interés –tanto que hasta enseñan– por los estudios procesales. Allí el doctor Mijail Mendoza –asesor del Tribunal Constitucional– presentó una ponencia que intituló: LA AUTONOMÍA PROCESAL CONSTITUCIONAL. MONROY GALVEZ, Juan. *“La Autonomía*

Pablo Córdova Medina define al Principio de Autonomía Procesal como “el principio de autonomía procesal está referido a la capacidad otorgada al Tribunal Constitucional para la configuración, desarrollo, complementación y adecuación de su proceso a través de su jurisprudencia, en concordancia con los fines establecidos en el artículo II del Título Preliminar del Código”<sup>46</sup>.

Landa Arroyo, respecto a los efectos de la Autonomía Procesal precisa que “le confiere al Tribunal Constitucional un importante grado de libertad y responsabilidad al momento de definir, subsidiariamente a la ley, su Derecho Procesal; permitiéndole desarrollar principios con pretensión de generalidad a través de la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes, de modo que puedan ser aplicados a casos similares posteriores”<sup>47</sup>.

### **3.2.3. Naturaleza Jurídica de la Autonomía Procesal.**

La naturaleza de la autonomía encuentra su raíz en dos principios del Estado constitucional: uno propio del derecho privado, en virtud del cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, fundado en la autonomía de la voluntad privada; otro propio del derecho público, basado en la autonomía de los poderes públicos y los organismos constitucionales, que encuentra su fundamento en el principio de división y control de poderes. La autonomía procesal de los procesos constitucionales se asienta en la idea de

---

*Procesal” y el Tribunal Constitucional: Apuntes sobre una relación inventada”. Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 2007. p. 283-284.*

<sup>46</sup>CÓRDOVA MEDINA, Pablo Alexander. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales”. Gaceta Constitucional Nº 45. p. 321.

<sup>47</sup> LANDA ARROYO, César. “Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional”. Ob. Cit, p. 73.

la autonomía del derecho público, que tiene su razón de ser en la Constitución como norma suprema —*lex legis*— y como norma fuente de derecho —*norma normarum*—. De ella emana su fuerza normativa para, por un lado, subordinar las normas legales como los códigos procesales a los mandatos constitucionales, y, por otro lado, ser fuente de creación del derecho, es decir, principio y límite para la expedición de las normas legales y la jurisprudencia constitucional<sup>48</sup>.

De este modo, el “Tribunal Constitucional ejerce su ‘autonomía procesal’ como especialidad frente a los demás órganos judiciales y constitucionales, cuando realiza ese perfeccionamiento jurisdiccional de su regulación procesal más allá de los métodos judiciales tradicionales de interpretación e integración del Derecho, creando reglas y principios procesales generales más o menos estables, de acuerdo con consideraciones de oportunidad”<sup>49</sup>.

### **3.2.4. Legitimidad del Principio de Autonomía Procesal.**

#### **i. Legitimidad Histórica:**

Con la Carta de 1979, se instituyó aldenominado Tribunal de Garantías Constitucionales, antecesor del actual Tribunal Constitucional, introduciéndose con ello el control concentrado de la Constitución. Sin embargo, la falta de independencia del mencionado órgano trajo consigo una postrísima producciónjurisprudencial, en lo que se refiere a las demandas de

---

<sup>48</sup> LANDA ARROYO, César. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”. En Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XV, Montevideo, 2009, p. 277-310, ISSN 1510-4974. p. 286.

<sup>49</sup> RODRÍGUEZ PATRÓN, Patricia, “La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21, Nº 62, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p 129.

inconstitucionalidad de leyes, percibiéndose una disposición a no declarar la inconstitucionalidad de las leyes, para no perturbar la acción política de los partidos gobernantes de turno<sup>50</sup>, Tribunal clausurado tras el autogolpe de Estado en el año de 1992. Más tarde, con la Constitución de 1993 se incorporó el modelo actual del Tribunal Constitucional.

De este segundo intento por instaurar un Tribunal Constitucional en nuestro país, dos son los periodos o escenarios que saltan a la vista en una retrospectiva general. El primero, marcado por la presencia de un régimen autocrático que maniata desde el inicio las funciones del Tribunal Constitucional y que quiso que éste funcionara para dar legitimidad “constitucional” a sus propias medidas, imponiéndole en su Ley Orgánica un consenso imposible de alcanzar cuando se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de una ley se trataba, y si bien se trató de un periodo de lucha interna en el propio seno del Tribunal, que terminó con la destitución de tres de sus miembros, este periodo ha sido caracterizado, con acierto, como aquel del Tribunal “en cautiverio”. Esta primera etapa se cierra con la huida del país de quien ejercía la presidencia en aquel entonces a finales del año 2000, y la restauración del Estado de Derecho con la designación, por parte del Congreso, del Dr. Valentín Paniagua Corazao como Presidente Constitucional.

La segunda etapa, que puede ser descrita como aquella de un nuevo intento, es conocida también como la del “Tribunal liberado”. Se inicia, con la restauración del régimen democrático y tiene los siguientes momentos cruciales: 1) El 17 de noviembre de

---

<sup>50</sup> MORALES GODO, Juan. Del Tribunal de Garantías Constitucionales al Tribunal Constitucional peruano. Análisis jurídico-político comparativo. Derecho PUCP, [S.l.], n. 53, p. 72, dec. 2000. ISSN 2305-2546. Consulta: 18 de febrero 2017. <<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6555>>

2000, con la reincorporación de los magistrados destituidos; 2) el 30 de mayo de 2002, con la elección de cuatro nuevos integrantes del Tribunal Constitucional; y 3) el 12 de julio de 2002, cuando se publica en “El Peruano” la Ley N° 27780, que modifica los artículos 4° y 26° de la Ley Orgánica del TC, permitiendo que el Tribunal opere efectivamente ejerciendo la función de control de constitucionalidad de las leyes<sup>51</sup>.

## ii. Legitimidad Normativa:

El principio de autonomía procesal encuentra legitimación desde la normativa constitucional, específicamente en los artículos 201 y 139 inciso 8 de la Constitución, así como en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

El artículo 201 de la Constitución establece: *“El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. (...)”*; bajo este precepto, no solo podemos deducir la autonomía e independencia del Máximo Intérprete de la Constitución respecto al resto del aparato estatal y privado, sino que también se entiende que le es reconocida al Tribunal, un libre albedrío en relación al proceso de garantía constitucional, siempre que esté sujeto a las reglas que legitiman las resoluciones judiciales.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> GRÁNDEZ CASTRO, Pedro y CARPIO MARCOS, Edgar. *“El Tribunal Constitucional peruano cumple 10 años desde su reinstalación”* (reporte de su labor jurisprudencial durante el año 2006). pp.139-140. Consulta: 27 de diciembre de 2016.  
<[http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/565/Direito%20Publico%20n182007\\_Pedro%20Grandez%20Castro%20Edgar%20Carpio%20Marcos.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/565/Direito%20Publico%20n182007_Pedro%20Grandez%20Castro%20Edgar%20Carpio%20Marcos.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>.

<sup>52</sup> CORDOVA MEDINA, Pablo Alexander. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales”*. Ob. cit.p.322.



El artículo 139, inciso 8 de la Carta Magna consagra el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Esto significa que el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para crear reglas procesales ante la falta de regulación expresa de la ley, con la finalidad de no dejar impunes los actos violatorios provenientes del Estado o de particulares y cumplir con los fines que persiguen los procesos constitucionales.

Por su parte, el artículo III del Título preliminar del Código Procesal Constitucional señala: “[...] el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”, mientras que el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece que en estos casos de vacío o defecto de la ley se podrá recurrir a los códigos procesales afines, siempre que no desnaturalicen los fines de los procesos constitucionales, es decir, la primacía de la Constitución y la tutela de los derechos constitucionales.

De este modo se reconoce, normativamente, la potestad del Tribunal Constitucional de adecuar las exigencias de las formalidades previstas en el Código Procesal Constitucional con el objeto de alcanzar los fines de los procesos constitucionales. Esta disposición sustenta también la autonomía procesal del Tribunal Constitucional en la medida en que reconoce a su favor la potestad de adecuar las formalidades contempladas en el Código Procesal Constitucional y, en particular, en los códigos procesales adjetivos que se aplican supletoriamente, cuando ello sea necesario para dar cumplimiento a los fines esenciales de los procesos constitucionales que, de conformidad con el artículo II

del Título preliminar del Código Procesal Constitucional, son los de “garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”<sup>53</sup>.

El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, respecto a la autonomía procesal ha sostenido que “tiene la potestad de modular, procesalmente, el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales, en general, y en el proceso de amparo, en particular. Este principio de autonomía procesal permite al Tribunal Constitucional determinar, en atención a las circunstancias objetivas de cada caso, a resolver las consecuencias que puedan generar los efectos de sus sentencias y el contenido de estas”.<sup>54</sup>

### **iii. Legitimidad Técnico Jurídica**

Giancarlo Rolla citado por Landa Arroyo, refiere que los Tribunales constitucionales, a diferencia de los otros jueces, gozan en general de márgenes de discrecionalidad significativos según la interpretación y la aplicación de las reglas procesales, que les permitan modificar la praxis anterior o derogar las normas procesales; pueden aprobar autónomamente normas integrativas o bien adoptar decisiones procesales<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> LANDA ARROYO, César. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”*. Ob. cit. pp. 291-292.

<sup>54</sup> STC Exp. N° 02609-2007-AA/TC, f. j. 4.

<sup>55</sup> LANDA ARROYO, César. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”*. Ob. cit. p. 292.

### **3.2.5. Posturas doctrinarias respecto a la legitimidad del Principio de Autonomía Procesal.**

#### **i. A favor de la Autonomía Procesal.**

César Landa Arroyo se pronuncia a favor del principio de autonomía procesal, indicando que el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad se ha encontrado frente a situaciones que han sido reguladas en forma insuficiente o que no han sido reguladas, siendo en dichos supuestos donde la aplicación del principio de autonomía procesal se justifica plenamente, ello a fin de no dejarse de impartir justicia ante los vacíos o defectos de la ley procesal, tornándose en necesario que el Tribunal Constitucional pueda ejercer un mayor grado de libertad al momento de configurar su derecho procesal, sin que esta libertad conlleve a la autarquía.<sup>56</sup>

El magistrado Figueroa Gutarra afirma que la aplicación del principio de autonomía procesal nos reporta muchos más beneficios que perjuicios, hace el derecho más eficaz en relación con un fin relevante en la justicia constitucional, como lo es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, y materializa la tutela de urgencia que exige la defensa de los principios, valores y directrices que enuncia la Carta Fundamental. El principio de autonomía procesal no genera desorden en el proceso ni caos material en la medida que su uso es excepcional, residual y extraordinario. Defendemos la fórmula de aplicación del principio de congruencia procesal en la medida que este igualmente cumpla la vigencia real, tangible y comprobable de los derechos protegidos por la Constitución, pero a su vez creemos que el

---

<sup>56</sup>Ibídem, p.310.

concepto de aplicación normativa se materializa en función de esa real compatibilidad a la que aludimos”<sup>57</sup>.

Pablo Alexander Córdova Medina expresa su conformidad con la incorporación del principio de autonomía procesal, dado que permite una constante innovación por parte del Tribunal Constitucional respecto de figuras no previstas por el legislador que, en determinado momento y lugar, se hacen necesarias la resolución de un conflicto prevaleciendo los derechos fundamentales de la persona ante cuestiones que, en muchos casos, son meramente formales<sup>58</sup>.

## **ii. Críticas a la Autonomía Procesal.**

El procesalista Juan Monroy Gálvez, desde un enfoque sumamente crítico señala lo siguiente respecto al Principio de Autonomía Procesal, presentándolo como una falacia arrogada por un Tribunal que todo lo puede (entiéndase el Tribunal Constitucional):

“Una falacia es la aplicación incorrecta de un principio lógico o la aplicación de un principio lógico inexistente. Por su lado, una petición de principio es una falacia que consiste en un error de razonamiento por el cual se toma como punto de partida del argumento precisamente aquello que se ha de demostrar. Todo esto viene a cuento a propósito de una actuación tendencial del Tribunal Constitucional peruano (en adelante TC).

Si el lector realiza una microinvestigación de campo con una muestra -una selección aleatoria- de veinte sentencias del

---

<sup>57</sup> FIGUEROA GUTARRA, Edwin. “*El principio de autonomía procesal*”. Notas para su aplicación material. Pensamiento Constitucional N° 19, 2014, p. 357 / ISSN 1027-6769. Consulta: 09 de enero del 2017.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/12532/13092>.

<sup>58</sup> CORDOVA MEDINA, Pablo Alexander. “*Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales*”. Ob. Cit. p. 332.

TC, en no menos de dieciocho encontrará un fundamento que, con variantes expresivas, es notable por su persistencia: “como ya lo ha dicho este colegiado”. El tema, aunque lo parezca, no es baladí, sobre todo si se tiene en cuenta que el uso de esta frase es selectivo, pues se presenta, precisamente, en aquellas situaciones donde la necesidad de un esclarecimiento o cita doctrinaria aparece indispensable.

Esta curiosa “técnica argumental” se ha convertido en superlativa desde que el TC, ha elevado sus fundamentos jurídicos a la categoría de axiomas (verdades que no necesitan demostración y que, por tanto, deben ser reconocidas como ciertas inexorablemente) cuya simple reminiscencia (“como ya lo ha dicho este colegiado”) hace inútil cualquier exigencia de fundamento adicional. En otras palabras: el oráculo ha hablado.

Como resulta evidente, detrás de esta falacia no existe únicamente una exacerbada consideración sobre aquello que el TC cree que es y cree que puede. También se encuentra la presencia de un instituto llamado “autonomía procesal”, cuyo origen, estructura y funciones resulta indispensable develar a fin de evitar que continúen los desvaríos<sup>59</sup>.

Finaliza señalando que el uso de la Autonomía Procesal Constitucional como fundamento para los estropicios causados en muchas de las sentencias que viene expidiendo el TC. Éstos se vienen cometiendo tomando a la Autonomía Procesal como fundamento, cuando, en realidad, se trata de una vulgar coartada multiuso.<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> MONROY GALVEZ, Juan. “La Autonomía Procesal y el Tribunal Constitucional: Apuntes sobre una relación inventada”. Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 2007.p. 276.

<sup>60</sup> Ibídem. p.290.

Ramírez Jiménez señala, respecto a la autonomía procesal, que “este ejercicio autárquico convierte (al Tribunal Constitucional) en un «poder legislador» sin control alguno, impropio de un sistema democrático y constitucional”<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson. “*Creación de reglas procedimentales no debe ser mera autarquía*”. Gaceta Constitucional, 72 (diciembre 2013). p. 16.

# **CAPÍTULO IV**

## **LÍMITES AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL**

#### **4.1. LÍMITES AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL**

Los límites pueden ser de dos tipos: formales y materiales. Los límites formales están establecidos en el derecho objetivo, es decir, en las normas jurídicas; mientras que los límites materiales se expresan en la jurisprudencia constitucional en la medida en que desarrolla los vacíos procesales de las normas. Por tanto, es posible afirmar que *prima facie* los límites materiales se encuentran en función de los límites formales<sup>62</sup>.

##### **4.1.1. Límites formales**

###### **a. La Constitución y las leyes.**

Todo poder constituido tiene y debe tener límites, puesto que el único poder, en principio, jurídicamente ilimitado es el poder constituyente, e incluso este, si persigue construir una Constitución democrática, no puede desconocer ni infringir el derecho internacional de los derechos humanos. Todo poder constituido – incluido obviamente el Tribunal Constitucional, debe ser susceptible de ser controlado para que se aseguren las libertades de las personas. Consecuentemente el Tribunal Constitucional como órgano revisor de la Constitución está subordinado a quien lo creó – el poder constituyente – y a su expresión de voluntad plasmada en la Constitución como su conjunto de normas.<sup>63</sup>

El primer límite se halla prescrito en el artículo 43 de la Constitución que establece lo siguiente: “La República del Perú se organiza según el principio de separación de poderes”. Este

---

<sup>62</sup> LANDA ARROYO, César. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”. Ob. cit. pp. 304.

<sup>63</sup> CARPIZO, Jorge. “El Tribunal Constitucional y sus límites”. Ob. Cit. p.71.



apartado condiciona al Tribunal Constitucional a no ampliarse las competencias que le han sido conferidas por la Constitución. El ejercicio que haga este Colegiado de su autonomía procesal “no supone una invasión a la competencia legislativa del Congreso de la República, en la medida que este sigue conservando su facultad para dictar leyes que pueden incidir en el objeto sobre el cual el Tribunal Constitucional ha establecido reglas procesales<sup>64</sup>.

Como lo afirma el propio Tribunal Constitucional en su jurisprudencia: “la complementación a la cual puede avocarse el Tribunal no supone una ampliación de sus competencias”<sup>65</sup>; esto es que no podrá apartarse de aquellas normas constitucionales y legales en que se han establecido los principios fundamentales de los procesos constitucionales, tales como el artículo 200 de la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional - Ley N° 28301.

#### **b. Los Tratados Internacionales.**

El artículo 55 de la Constitución establece que ‘Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional’. Asimismo en su cuarta disposición final y transitoria dispone que ‘las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú’. En este sentido se puede decir que en ejercicio de su autonomía procesal, el Tribunal Constitucional no está facultado para limitar o restringir el alcance que los tratados internacionales reconocen a los procesos

---

<sup>64</sup> LEÓN VÁSQUEZ, Jorge, “*El Tribunal Constitucional y la configuración de su Derecho Procesal*”. En: Justicia Constitucional. Año II, N° 4, Lima, Palestra, 2006, p. 53.

<sup>65</sup> STC Exp. N° 0020-2005-PI/TC, f. j. 3.

constitucionales, sino por el contrario, el Tribunal encuentra en la justicia supranacional un límite a dicho ejercicio.

**c. La vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución: artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional**

El Artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.

El Tribunal Constitucional está llamado a garantizar que la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución no cedan ante la ausencia o la deficiencia de normas procesales. Es así que el sustento de la institución opera también como su límite, puesto que el Tribunal Constitucional está obligado a expresar las razones que justifican, en el marco de un caso concreto, la necesidad de recurrir al principio de autonomía procesal, con lo cual debe poner en evidencia los valores y principios constitucionales que orientan y legitiman su labor<sup>66</sup>.

**d. El reconocimiento de los principios procesales: artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional**

El Artículo III del Título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que: “Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del

---

<sup>66</sup> LANDA ARROYO, César. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”*. Ob. cit. pp. 306.

proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, intermediación y socialización procesales”.

El Tribunal Constitucional en una de sus resoluciones afirma ‘(...) debe reconocer el lugar que ocupa el Derecho Procesal Constitucional dentro del ámbito del Derecho Procesal general, afirmándose la naturaleza del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional, sin que ello suponga negar las singularidades de la jurisdicción constitucional y los principios materiales que la informan; lo contrario comportaría el riesgo de someterse a un positivismo jurídico procesal basado en la ley.’<sup>67</sup>

#### **4.1.2. Límites Materiales.**

##### **a. Principio de Subsidiariedad.**

Es decir que el Tribunal Constitucional, al encontrarse frente a una laguna o defecto en el proceso constitucional, tendrá que recurrir a la aplicación supletoria e integración de los códigos procesales afines a la materia en controversia, y solo en el caso de que estas resulten incompatibles con los fines de los procesos constitucionales, se verá facultado para crear una nueva regla procesal<sup>68</sup>.

##### **b. Los principios de razonabilidad y proporcionalidad**

En el Estado constitucional de derecho, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el artículo 200 de la Constitución<sup>69</sup>, son aplicables a todo el ordenamiento

---

<sup>67</sup> Resolución de admisibilidad recaída en el EXP. N.º 0020-2005-PI/TC ,fj.3

<sup>68</sup> CORDOVA MEDINA, Pablo Alexander. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales”*. Ob. Cit. p. 323.

<sup>69</sup> Artículo 200° de la Constitución Política del Perú: “...Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano

constitucional y, por ende, limitan también la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Dichos principios exigen que la configuración autónoma del proceso se justifique plenamente en los fines que el Tribunal Constitucional persigue garantizar, y presuponen para dicho órgano constitucional la necesidad de evaluar: a) si la aplicación del principio de autonomía procesal es idónea para conseguir el fin constitucional que se pretende con tal medida; b) si existe una auténtica necesidad de aplicar dicho principio, y c) si el grado de libertad que asume el Tribunal Constitucional en la configuración de su derecho procesal es proporcional a los fines que persigue<sup>70</sup>.

### **c.El Principio de Interdicción de la Arbitrariedad**

La Constitución no ha establecido expresamente este principio, no obstante el mismo puede desprenderse de su artículo 45°, que señala: *‘El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen’*.

El Tribunal Constitucional por otro lado ha señalado que dicho principio tiene un doble significado:

[...] a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón

---

jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo...”.

<sup>70</sup>LANDA ARROYO, César. *“La autonomía procesal del Tribunal Constitucional: La experiencia en el Perú”*. Ob. Cit. p. 308.

de explicarlo (STC, expediente N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 12.)

En ese orden de ideas, si el Tribunal Constitucional incorpora reglas procesales sin fundamento y sin ser acordes a los fines de los procesos constitucionales, estaría vulnerando flagrantemente este principio, apareciendo el artículo II del Código Procesal Constitucional como un límite más a su aplicación, en sentido que no deberán incorporarse nuevas reglas procesales que no estén justificadas en razón a garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. “El Tribunal Constitucional está obligado a expresar las razones que justifican, en el marco de un caso concreto, la necesidad de recurrir al principio de autonomía procesal; con lo cual debería poner en evidencia los valores y principios constitucionales que orientan y legitiman su labor<sup>71</sup>.

#### **d.El Debido Proceso**

El proceso ‘es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia’, a lo cual contribuyen ‘el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal’<sup>72</sup>. En este sentido, dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada

---

<sup>71</sup> LANDA ARROYO, César. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”*. Ob. cit., pp. 91-92.

<sup>72</sup> Corte IDH. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC- 16/99 del 1 de octubre de 1999, párrafo 117.

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial<sup>73</sup>.

El Debido Proceso está contemplado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, como un principio – derecho de la función jurisdiccional.

En buena cuenta, el debido proceso supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales y a su vez constituye un verdadero límite a la regulación del poder estatal en una sociedad democrática<sup>74</sup>.

De este modo “el término de autonomía procesal no puede ser utilizado para crear caos en el proceso de manera que se generen nuevas reglas procesales que lo desnaturalicen, puesto que el proceso se rige por reglas que deben ser cumplidas, garantizando así el derecho de toda persona al debido proceso y a la tutela procesal efectiva con incidencia en los otros derechos fundamentales, afirmar lo contrario sería colocar el concepto de autonomía procesal como sinónimo de desorden, rompiendo el proceso<sup>75</sup>.

#### **4.2. LABOR INTERPRETATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL**

Son muchas las manifestaciones del Principio de Autonomía Procesal, así como de naturalezas muy diversas, como el “amparo

---

<sup>73</sup> Corte IDH. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC- 16/99 del 1 de octubre de 1999, párrafo 118.

<sup>74</sup> Cf. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de junio de 2005, párrafo 78.

<sup>75</sup> STC Exp. N° 03674-2007-PC/TC Fundamento de Voto 4 del Magistrado Vergara Gotelli.

contra amparo”<sup>76</sup>, la conversión de un proceso constitucional en otro<sup>77</sup>, el recurso de apelación por salto<sup>78</sup>, entre otras instituciones creadas o importadas por el Tribunal Constitucional, en aras de la “omnipotencia” del principio antes mencionado, no obstante es pertinente al objeto de estudio de la presente investigación, la aplicación de la autonomía procesal al caso concreto en el momento de hacer la labor de interpretación correspondiente de las normas procesales o sustantivas, interpretación que encuentra sus límites en las instituciones y principios antes mencionados y que de no ser respetados, devienen en excesos o arbitrariedades cometidos paradójicamente por el supremo intérprete de la Constitución.

Mijail Mendoza señala que “la novedad de incorporar la autonomía procesal del Tribunal Constitucional yace en que, a diferencia de los jueces ordinarios del Poder Judicial —que se encargan, en principio, solo de aplicar la ley a través de subsumir el hecho en una norma y su independencia está garantizada por su subordinación a la ley—, en los procesos constitucionales los jueces especiales y en última instancia el Tribunal Constitucional se encargan de controlar a la ley y darle el sentido interpretativo,

---

<sup>76</sup> En el Exp. N° 4853-2004-PA/TC en el que el Tribunal Constitucional desarrolla las reglas de procedencia del “amparo contra amparo” y del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. En dicha sentencia se establece que el fundamento jurídico para admitir la procedencia del “amparo contra amparo” se encuentra en el artículo 202, inciso 2 de la Constitución, que determina que el proceso de amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, contrario sensu, si la decisión judicial vulnera el debido proceso o la tutela procesal efectiva no tendría el estatus de constitucional, en consecuencia, debe admitirse un nuevo amparo frente a la resolución infractora.

<sup>77</sup> Esta debe aplicarse cuando la pretensión del demandante no concuerda con el proceso constitucional de la libertad elegido, es decir, es la situación en que el petitorio solicitado no concuerda con la vía procedimental elegida; por lo que el Tribunal Constitucional, con el objeto de proteger de manera adecuada los derechos de las personas, procede a convertir un proceso constitucional en otro. STC Exp. N° 00105-2010-Q/TC, f. j. 5. 22; STC Exp. N° 05761-2009-HC/TC, f. j. 25.

<sup>78</sup> Podemos definir al recurso de apelación por salto como el instituto procedimental mediante el cual se podrá verificar si lo dispuesto por el Tribunal Constitucional ha sido estrictamente cumplido en todos sus extremos y que, además, se erige como la vía más acorde a los principios de dignidad de las personas, cosa juzgada, plazo razonable y de la ejecución de las resoluciones judiciales. CORDOVA MEDINA, Pablo Alexander. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales”. Ob. Cit. p. 330.

inaplicarla o dejarla sin efectos de manera particular o general, conforme a la norma suprema. Esto solo es posible en la medida en que la autonomía procesal le otorga al Tribunal Constitucional la capacidad para crear normas procesales, su reglamento y/o sentencias vinculantes, para la consecución de los fines de los procesos constitucionales”<sup>79</sup>.

Señala Quiroga León que la labor interpretativa del Tribunal Constitucional supone un examen abstracto de la norma cuestionada de constitucionalidad, en donde el referente constitucional –a través del análisis de subsunción– determinará si la misma es compatible con los parámetros establecidos por la Carta Magna, incluyendo sus principios generales y valores intrínsecos a la misma. Corresponde al Tribunal Constitucional la interpretación de la Constitución como intérprete auténtico de la misma, en tanto que corresponde a los jueces del Poder Judicial la interpretación auténtica de la ley en general. El Tribunal Constitucional no es ni debe ser un tribunal de legalidad, lo que está reservado para la Corte Suprema de Justicia de la República y sus órganos jerárquicamente dependientes en materia jurisdiccional.

Sin embargo, en los últimos años dicha actividad de interpretación constitucional ha sido desnaturalizada debido a factores eminentemente políticos, cuya causa originaria se puede encontrar en el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República<sup>80</sup>.

En ese sentido, un magistrado del Tribunal Constitucional debe ser, jurista que a través de la ciencia constitucional y de sus

---

<sup>79</sup>MENDOZA ESCALANTE, Mijail. “*La autonomía procesal constitucional*”. Ob. Cit. p. 99.

<sup>80</sup> QUIROGA LEÓN, Aníbal. “*Los excesos del Tribunal Constitucional peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución*”. Estudios Constitucionales, vol. 3, núm. 2, Santiago de Chile. 2005, p 480.



cualidades humanas pueda aportar sus conocimientos del derecho y su experiencia frente a las causas, manteniendo neutralidad, incorruptibilidad y claridad en sus opiniones. Solo así el Tribunal Constitucional estará en la capacidad de dar una respuesta razonada, justificada y coherente ante los problemas que se generen como consecuencia de los vacíos o deficiencias de la ley procesal<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> LANDA ARROYO, César. *“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”*. Ob. cit. p. 292.

# **CAPÍTULO V**

## **ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS**

## **5.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS**

En este capítulo presentamos la información principal obtenida de las sentencias del Tribunal Constitucional que han sido objeto de nuestro análisis, luego de ello desarrollamos la crítica correspondiente para al fin indicar conclusiones previas sobre el tema materia de investigación.

### **5.1.1. Caso arancel del cemento**

Se tiene la Sentencia del Tribunal Constitucional – Exp. 3116-2009- PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por Cementos Lima S.A. contra la resolución de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 17 de junio de 2008, que confirma la decisión de primera instancia que declara improcedente, *in límine*, la demanda interpuesta por Cementos Lima S.A. contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitando que se declare inaplicable el artículo 2.º del Decreto Supremo N° 158-2007-EF, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 13 de octubre de 2007, que modificó de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo N.º 017-2007 EF, modificadas por los Decretos Supremos N° 091- 2007-EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás; y que, reponiéndose las cosas al estado anterior, se ordene que toda importación con cargo a las sub-partidas nacionales referidas paguen la tasa del derecho arancelario ad valorem del 12%.

El fundamento de la demanda era que la modificación de la tasa de los derechos arancelarios de las sub-partidas nacionales referidas vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante

la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida económica de la Nación.

El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 de enero de 2008, declaró improcedente, *in límine*, la demanda, por considerar que el proceso de acción popular constituye la vía procesal específica, igualmente satisfactoria, para la protección de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, conforme lo establece el inciso 2) del artículo 5.º del Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, emite la sentencia analizada, de fecha 10 de agosto de 2009, en la que considera errada la calificación efectuada y si bien señala correspondería ordenar que se admita a trámite la demanda, considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido notificado del concesorio del recurso de apelación y se ha apersonado y expuesto sus fundamentos sobre la pretensión demandada, lo que implica que su derecho de defensa está garantizado, por lo que procede a emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

En ese sentido, luego de hacer un análisis de los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a participar en la vida económica de la Nación, así como a la igualdad ante la Ley, concluye que En este contexto, debe señalarse que el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modificó de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás, no cumple con la finalidad constitucional de los aranceles en una economía social de

mercado, pues no persigue favorecer la producción nacional del cemento, proteger la industria nacional del cemento, promover la inversión nacional, o incentivar la competitividad de los productos nacionales, precisa además que ello no quiere decir que el Presidente de la República, se encuentre impedido de reducir las tarifas arancelarias, por el contrario, constitucionalmente tiene la facultad de regular mediante decretos supremos las tarifas arancelarias (artículo 118º, inciso 20) de la Constitución); sin embargo, dicha regulación no puede afectar el principio de igualdad en materia económica ni desproteger a la inversión e industria nacional para favorecer a la inversión e industria extranjera.

Así, el Tribunal Constitucional considera que la reducción de 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales mencionadas, si bien puede constituir un acto de política arancelaria, resulta ser un acto desproporcionado, y por ende, constitucionalmente prohibido por el principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez, que la reducción a 0% de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en realidad, constituye un acto de exoneración o exención de tarifas y no una reducción que tenga una finalidad constitucionalmente legítima; por lo que en virtud del control difuso reconocido en el artículo 138.º y en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene que declararse inaplicable el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, en lo que respecta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás, y en consecuencia de ello, se restablece la tasa del 12% de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás, por ser éste el estado anterior a la violación.

En consecuencia resuelve:

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley.

2. INAPLICABLE el artículo 2º del Decreto Supremo N° 158-2007-EF, que modificó de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo N° 017-2007-EF, modificadas por los Decretos Supremos N° 091-2007-EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás.

3. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria que, a partir del día de siguiente de notificada la presente sentencia, no aplique el artículo 2º del Decreto Supremo N° 158-2007-EF, publicado en el diario oficial *E/ Peruano* el 13 de octubre de 2007, en lo que respeta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás.

4. REPONIÉNDOSE las cosas al estado anterior a la violación constitucional del derecho a la igualdad ante la ley, se restablece la tasa del 12% de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los demás; sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda regular nuevamente la tasa arancelaria referida conforme al fundamento 24, *supra*.

#### **5.1.2. Caso Petroaudios – Excarcelación de Alberto Quimper**

A continuación tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional **EXP. N.º 02641-2012-PHC/TC, de fecha 10 de setiembre de 2012**; Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Quimper Herrera contra la resolución expedida

por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 4 de mayo de 2012, que declaró improcedente la demanda de Habeas Corpus interpuesta por Alberto Quimper Herrera contra la jueza Supernumeraria Ingrid Rodríguez Gamarra por haber actuado como juez del Tercer Juzgado Liquidador de Lima, Despacho A, y contra los jueces integrantes de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Morante Soria, Colquicocha Manrique y Alessi Janssen, solicitando la nulidad de la Resolución de fecha 21 de octubre de 2011 que revocó la medida de arresto domiciliario por la de detención, y de su confirmatoria de fecha 11 de enero de 2012 en el proceso penal que se le sigue por los delitos contra la administración pública, patrocinio ilegal y otros (Expediente N.º 107-2008).

En dicha sentencia, el Máximo Intérprete de la Constitución fundamenta textualmente:

De una lectura de la resolución cuestionada de fecha 21 de octubre de 2011, los argumentos que sustentan la resolución consisten en que anteriormente se habría apercibido al recurrente para que se abstenga de abandonar su domicilio, lo que habría incumplido:

“...merced a los hechos públicos de supuesta infracción a su deber de permanecer en el domicilio fijado como morada para el cumplimiento de la medida (noticias periodísticas de abandono de domicilio), el juzgado emite la resolución de fecha 12 de agosto del año dos mil nueve, por el cual se decide formalmente apercibir al procesado Alberto Quimper Herrera de conformidad con el numeral ciento cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal, para que se abstenga de abandonar su domicilio bajo ninguna circunstancia, mientras dure su arresto domiciliario

(...)que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto el comandante de la División de Arresto Domiciliario Ernesto Millones Conturín, ha emitido informe sobre las publicaciones periodísticas que establecían la vulneración al cumplimiento de las reglas de conducta por parte del procesado Alberto Quimper Herrera, justificando el incumplimiento de traslado directamente a su domicilio luego de finalizada la audiencia judicial, por la necesidad de aquel de miccionar, generando que los custodios busquen servicios higiénicos por la zona, logando ubicar el restaurante La Bonbonniere de la calle Burgos cuatrocientos quince- San Isidro para comprar pan y salir inmediatamente, (...). Sin embargo dicha explicación resulta carente de verosimilitud, desde que la noticia periodística del canal ATV de televisión muestra como respuesta espontánea del imputado que este señala “vengo de comer”, tanto más si la ubicación de su domicilio de (...) Urbanización Aurora Miraflores está ubicado en zona muy distinta al lugar en que éste fue sorprendido por la cámaras de televisión, (...)”.

Como es de verse con fecha 12 de agosto de 2009, se había emitido resolución judicial mediante la cual se indicaba que elprocesado Quimper Herrera debía abstenerse de abandonar su domicilio bajo apercibimiento de revocársele la medida de detención domiciliaria por prisión preventiva, y en cumplimiento de dicho apercibimiento es que mediante la resolución cuestionada se le impuso la medida de detención. Ahora bien, cabe señalar que del texto de la citada resolución no se especifica de qué manera el hecho de haberse desviado de la ruta para retornar a su domicilio constituye un abandono del arresto domiciliario, máxime si salió de su domicilio conducido por el resguardo policial para dirigirse a una diligencia judicial, y el retorno fue efectuado



también conducido por el resguardo policial. Así en el fundamento cuarto de la citada resolución de primera instancia se lee:

“Que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto el comandante de la División de arresto domiciliario (...) ha emitido un informe (...) justificando el incumplimiento de trasladarlo directamente a su domicilio luego de finalizada la audiencia judicial, por la necesidad de aquel de miccionar, generando que los custodios busquen servicios higiénicos por la zona...”.

Para este Tribunal resulta claro que el recurrente, al encontrarse bajo detención domiciliaria no tenía pleno dominio de su libertad ambulatoria, y solo podía desplazarse hacia el lugar en el que se llevaría a cabo la diligencia judicial y desde aquel hacia su domicilio bajo custodia policial, por lo que no le pueden ser imputables, en principio, las demoras en el traslado.

Por tanto, la privación de libertad resulta arbitraria al no sustentarse en una causal válida que autorice la revocación de la detención domiciliaria por prisión preventiva. En este sentido, la demanda debe ser estimada, disponiéndose la libertad del recurrente.

Es decir el Tribunal Constitucional, bajo el argumento de la no existencia de una causal de revocatoria de detención domiciliaria resolvió:

1. Declarar **FUNDADA** la demanda en lo que se refiere a la afectación del derecho a la libertad personal.

2. Declarar la nulidad de la resolución de fecha 21 de octubre del 2011 expedida por el Tercer Juzgado Penal Liquidador de Lima, y su confirmatoria de fecha 11 de enero del 2012, que disponen la detención de Alberto Quimper Herrera en el proceso

que se le sigue por delito contra la administración pública, patrocinio ilegal y otros (Expediente N° 107-2008).

3. Disponer la excarcelación del recurrente en el referido proceso penal.

### **5.1.3. Caso píldora del día siguiente**

Sentencia de fecha 16 de octubre de 2009, en el EXP. N.O 02005-2009-PA/TC, derivada de la demanda de Amparo interpuesta con fecha 29 de octubre del 2004 por la ONG "Acción de Lucha Anticorrupción" contra el Ministerio de Salud con el objeto de que dicha dependencia estatal se abstenga: a) de iniciar el programa de distribución de la denominada "Píldora del Día siguiente" en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita, b) de distribuir bajo etiquetas promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del Método de Anticoncepción Oral de Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República. A juicio de la demandante, se trata de evitar que se vulnere en forma flagrante el derecho a la vida del concebido.

Con fecha 17 de agosto de 2005 el Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada en parte la demanda, fundamentalmente por considerar que por el desempeño de la demandada en cuanto a la ejecución del Programa de Distribución Pública de la denominada píldora del día siguiente, se podría generar una amenaza sobre el derecho a la vida del concebido al no haberse descartado en forma palmaria el "tercer efecto" del citado fármaco. La demanda sin embargo se desestima en cuanto al

extremo en el que se solicitaba la previa consulta al Congreso de la República, por parte de la demandada.

Por su parte la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 27 de noviembre de 2008 y tras sucesivas discordias, revoca la sentencia apelada en el extremo en que se declara fundada la demanda, y reformándola la declara fundada sólo en parte, pero limitando la decisión en cuanto se refiere a la vulneración del derecho a la información. Argumenta su posición en el hecho de que en las Guías Nacionales de Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva no se ha consignado que los Anticonceptivos Orales de Emergencia producen una ligera alteración al endometrio, que en todo caso no es determinante para impedir la implantación. Por otro lado se declara infundados los otros extremos de la demanda, tanto el que señala que se estaría vulnerando el derecho a la vida por tener el anticonceptivo oral de emergencia carácter abortivo, como el que pedía ordenar al Ministerio de Salud excluir al citado anticonceptivo de sus programas de planificación familiar.

Luego de las valoraciones efectuadas, el Tribunal constitucional concluye lo siguiente:

*Por ello, este Colegiado considera que el presente caso permite revalorizar el status de consumidor no como el de ser sujeto pasivo de la economía que observa con indiferencia o impotencia el modo como los agentes económicos y las entidades del Estado competentes desarrollan sus actividades o entran en disputa, sino el de ser destinatario fundamental de las relaciones que la sustentan y, por supuesto, de aquellas que la justifican en el marco del Estado social y democrático de Derecho. Corresponde pues establecer límites fundamentados en la*

*relevante posición que ocupa, lo que supone que no se puede permitir el acceso al mercado de productos cuyos efectos no se encuentran debidamente establecidos, por los riesgos inminentes que representa no sólo para la vida del concebido, sino incluso por los efectos secundarios que pueden presentarse en la propia mujer que las ingiere.*

*Entonces surge la interrogante sobre la legitimidad del Estado para intervenir de alguna manera frente a esta situación. El razonamiento económico alega que en los "mercados perfectos" se debe permitir a los compradores y vendedores interesados llevar a cabo sus transacciones comerciales sin interferencia del gobierno. Pero los productos farmacéuticos y la atención de salud son diferentes de otros bienes de consumo, por lo que varias consideraciones apoyan la necesidad de participación del gobierno. Uno de estos supuestos habilitantes es el desequilibrio de información, pues a entender de este Colegiado queda acreditado que las mujeres destinatarias, y a menudo los profesionales de la salud, tienen dificultades para tener información completa acerca de la calidad, inocuidad, eficacia e idoneidad de este producto.*

*En consecuencia, todo ello exige que el consumidor disponga de información suficiente sobre la seguridad y efectividad del producto. Son las autoridades competentes las que deben efectivamente cerciorarse, hasta tener un grado de certeza, que el fármaco tiene propiedades benéficas para la salud y que no produce efectos secundarios mortales o dañinos. Sin embargo, una vez que esas autoridades efectúan tales exámenes y autorizan el fármaco sin grados de dudas sobre ello, los terceros que sostengan que las autoridades se han equivocado, deben*

*probar el efecto dañino que alegan (inversión de la carga de la prueba).*

En virtud de los argumentos y fundamentos que exponen, el Tribunal Constitucional resuelve:

Declarar **FUNDADA** la demanda; en consecuencia, ordénese al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada "Píldora del Día Siguiente".

Ordenar que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen la denominada "Píldora del Día Siguiente" incluyan en la posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado.

#### **5.1.4. Caso reingreso a la carrera judicial o fiscal**

Sentencia recaída en el EXP. N.º 1333-2006-PA/TC, de fecha 08 de enero de 2006, con motivo del recurso de agravio constitucional interpuesto por Jacobo Romero Quispe, invocando violación y amenaza de violación entre otros, de sus derechos constitucionales a la dignidad, al honor y a la buena reputación, al trabajo y a la igualdad ante la ley, contra el Consejo Nacional de la Magistratura, demanda interpuesta con fecha 16 de abril de 2004.

Solicita se le declare apto para el concurso público para cubrir vacantes de Fiscales Adjuntos Supremos, Vocales y Fiscales Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales, Jueces de Paz Letrado y Fiscales Adjuntos Provinciales, materia de la Convocatoria N.º 001-2004-CNM, así como para las

futuras convocatorias que realice el emplazado. Manifiesta que el demandado convocó a concurso público para cubrir las plazas de Vocales y Fiscales Supremos (Convocatoria N° 002-2003-CNM), y que, habiendo cumplido todos los requisitos, postuló a la plaza de Vocal Supremo; que sin embargo, el demandado lo consideró no apto debido a que la resolución N° 500-2002-CNM no lo ratificó en el cargo de Juez Mixto del Cono Nortede Lima. Expresa que, interpuesto el recurso de reconsideración, éste fue desestimado mediante la Resolución N. 0 034-2004-CNM, del 23 de enero de 2004 Constitucional, los jueces y fiscales no ratificados sí tienen derecho a postular nuevamente a la magistratura y, por ende, de acceder a la carrera judicial; que por tanto, no existe impedimento alguno para ser considerado apto como postulante a la Convocatoria N° 002-2003-CNM, a la Convocatoria N.º 001-2004-CNM, así como a futuras convocatorias., y que, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal

El Consejo Nacional de la Magistratura por su parte contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y manifiesta que la decisión de declarar al recurrente no apto se sustenta en el inciso 2) del artículo 154º de la Constitución y en el artículo 30º de su Ley Orgánica; que, respecto a la Convocatoria N° 002-2003-CNM, el concurso ya concluyó y, por ende, existe una irreparabilidad del supuesto acto lesivo. Consecuentemente, alega que no ha vulnerado derecho constitucional alguno, sino que, por el contrario, ha actuado conforme a la Constitución y la ley. Aduce, además, que las decisiones del Tribunal Constitucional no pueden ser consideradas vinculantes, pues fueron emitidas por Sala, y no por el Pleno.

Luego de analizado el caso, el Tribunal Constitucional establece como fundamentos los siguientes:

*4. La controversia de autos, respecto de los alcances del artículo 154° inciso 2), de la Ley Fundamental, no es una materia nueva para este Colegiado. En efecto, en las STC N. 0 5 1941-2002-AA/TC, 1525-2003-AA/TC, 2731-2003-AA/TC, y más recientemente, a través de la STC N. 0 3361-2004-AA/TC, que estableció un nuevo precedente, el Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el particular.*

*5. Así, este Tribunal ha sostenido que podría afirmarse que la no ratificación judiciales un acto de consecuencias aún más graves que la destitución por medidas disciplinarias, ya que, a diferencia de esta última, el inciso 2) del artículo 154° de la Constitución dispone, literalmente, que "Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público", mientras que los destituidos por medidas disciplinarias si pueden reingresar. Al respecto, la Constitución garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación por ningún motivo en el artículo 2.2°, de modo que no cabe el tratamiento discriminatorio que da a los que fueron destituidos por medida disciplinaria, para quienes no rige tal prohibición, al menos en la etapa de postulación para el reingreso a la carrera judicial.*

*6. La no ratificación no implica una sanción, por lo que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la carrera judicial es incongruente con relación a la propia naturaleza de la institución, ya que, como se ha expuesto, ésta no constituye una sanción, sino, en todo caso, una potestad en manos del Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de verificar, justificadamente, la actuación de los magistrados en tomo al ejercicio de la función jurisdiccional confiada por siete años.*

7. Tal es la interpretación que se debe dar a aquella disposición constitucional ("Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público"), pues, de otra forma, se podría caer en el absurdo de que una decisión que expresa la manifestación de una potestad constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, respecto de la forma como se ha desempeñado la función jurisdiccional, sin embargo, termina constituyendo una sanción con unos efectos incluso más agravantes que los que se puede imponer por medida disciplinaria; produciendo así un trato desigual injustificado. Por ello, sin perjuicio de exhortar al órgano de la reforma constitucional a que sea éste el que, en ejercicio de sus labores extraordinarias, defina mejor los contornos de la institución, permitiendo hacer compatibles los derechos de los magistrados no ratificados con las funciones que cumple la ratificación, este Colegiado considera que tales magistrados no están impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público.

8. Lo expuesto en los Fundamentos 5 a 7 constituye la posición de este Colegiado respecto de los alcances del inciso 2) del artículo 154º de la Constitución. Quiera todo ello decir, en resumidas cuentas, que si se asume que la no ratificación no representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse, como que, por encontrarse en dicha situación, un magistrado no ratificado se encuentra impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si la no ratificación es un acto sustentado en la evaluación que, en ejercicio de su potestad constitucional ejerce la institución emplazada, mal puede concebirse que los no ratificados no puedan volver a postular a la Magistratura cuando tal prohibición no rige, incluso,



*para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y esta norma debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones que reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 154º inciso 2), no puede impedir en modo alguno el derecho del demandante a postular nuevamente a la Magistratura.*

*25. Bajo tales precisiones, este Tribunal estima que, sobre la base de lo expuesto a lo largo de la presente sentencia, las reglas de derecho que se desprenden directamente del caso pueden ser resumidas en los siguientes términos:*

*a. Regla Procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante, cuando se estime una demanda por violación o amenaza de violación de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación directa de una disposición de la propia Constitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no obstante ser manifiestamente incongruente con ella misma o con la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) y que resulte, por ende, vulneratoria de los valores y principios constitucionales, así como de los derechos fundamentales de los magistrados no ratificados que deseen postular nuevamente a la magistratura.*

*b. Regla sustancial: El Consejo Nacional de la Magistratura debe tener presente que, el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, ha integrado el artículo 154.2º, con el numeral 2.2º, ambos de la Constitución, en el sentido que no se puede impedir en modo alguno el derecho de*

*los magistrados noratificados de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el hecho de no haber sido ratificado no debe ser un impedimento para reingresar a la carrera judicial.*

En tal sentido el Tribunal Constitucional resuelve:

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo referido a la Convocatoria N° 002-2003-CNM, la Resolución N° 034-2004-CNM y la Convocatoria N.º 001-2004-CNM, de acuerdo con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 1.º del Código Procesal Constitucional, y conforme a lo í expuesto en los Fundamentos N.º 18 a 21, supra.

2. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo referido a la invocada amenaza de afectación de los derechos constitucionales materia de la demanda, respecto de las futuras convocatorias a concurso público que efectúe el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo expuesto en el Fundamento N.º 23, supra; en consecuencia,

3. Declarar, conforme a lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que la presente sentencia y, en particular, los Fundamentos N.ºs 4 a 14, como las reglas contenidas en el Fundamento N° 25, supra, constituyen precedente vinculante.

4. Ordena al Consejo Nacional de la Magistratura, y a todos los jueces de la República, bajo responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por este Tribunal, en el sentido de que los magistrados no ratificados no están impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público y por tanto, de reingresar a la carrera judicial.

#### **5.1.5. Caso condonación de la deuda de Panamericana Televisión**

Tenemos también la sentencia correspondiente al EXP. N.º 04617-2012-PA/TC de fecha 12 de marzo de 2014, que resuelve el recurso de agravio constitucional interpuesto por Panamericana Televisión S.A., debidamente representada por su apoderado Víctor Hugo Velarde López, contra la resolución de fecha 18 de abril de 2012, expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta con fecha 25 de mayo de 2011, contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solicitando que se declare inexigible la deuda tributaria acumulada durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2003 y el 8 de junio de 2009.

La demanda se formuló en mérito a una presunta afectación a derechos a la libertades informativas, en cuanto derecho a fundar medios de comunicación, “a participar en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, en la manifestación que sustenta la titularidad de derechos fundamentales para las personas jurídicas”, “a la propiedad y a la herencia en la posición iusfundamental de inmunidad frente a las intervenciones injustificadas de los poderes públicos y de terceros”, y a “la libertad de empresa en la manifestación de libertad de organización”.

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima declara improcedente la demanda estimando que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, Resolución confirmar por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima

Para resolver el caso, el Tribunal Constitucional realiza el siguiente análisis:

15. *Un embargo en forma de administración de bienes supone asumir la representación y gestión de una empresa por el Órgano de Auxilio, que en este caso es el Administrador. De allí que, los funcionarios que conforman los órganos directivos y de ejecución de la empresa cesan en sus funciones, las mismas que, al ejecutarse la medida, son asumidas por el administrador, quien es designado por el juez y es a quien representa. En este sentido, “en la administración judicial de cautela existe una relación de derecho público, en la cual el Juez, mediante un órgano de auxilio interfiere en la administración de bienes bajo tutela judicial” (Cfr. PODETTI, Ramiro: Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, T. IV, Tratado de las Medidas cautelares, Ediar S.A. editores, Buenos Aires, 1956, p. 245).*

16. *Este instituto reviste características singulares, constituyendo por su especial naturaleza y atendiendo a la finalidad que persigue, una medida cautelar, de excepción, a la que debe recurrirse una vez agotadas todas las instancias, para conjurar el perjuicio potencial - para la sociedad o asociación - o acierto que se deriva de acciones u omisiones de los administradores, lo que implica un acendrado respeto por el ejercicio normal de los órganos propios, naturales de la entidad Societaria (Cfr. COUSO, Juan Carlos: Intervención y administración judicial de sociedades, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, Argentina, 1983, p. 21).*

17. *Dentro de las obligaciones del administrador se encuentra la de pagar los tributos (artículo 671, numeral 4 del Código Procesal Civil). Pero qué sucede cuando el administrador deja de cumplir con las obligaciones tributarias a que está obligado durante el tiempo que dura su administración. Acaso una*

*vez terminada su administración, los propietarios de la empresa, a quienes se le despojó de la administración de la misma tienen que soportar los malos manejos de un mal administrador que fue designado por el juez.*

*18. Conviene precisar aquí que los argumentos de la SUNAT descritos en el punto 2.2 de la presente sentencia son muy parecidos a los argumentos del Estado peruano expresados en el caso IvcherBronstein Vs. Perú resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquella oportunidad el Estado expresó que la SUNAT “no hace ninguna distinción respecto de la compañía, [ya que]independientemente de quienes sean los socios, gerente, directorio, [...] administración, lo que hace, loque verifica, es simplemente [...] si hay impuesto por pagar o no”. Para el Estado “debe tenerse presente que los tributos operan por la generación del hecho económico, y no corresponde a laAdministración determinar si provienen o no de operaciones lícitas [...]. Consecuentemente, las consideraciones de hecho alegadas (actuación de usurpadores) no tienen vinculación con la exigibilidad de la deuda tributaria de [la CLRSA]”. Asimismo, resaltó que “el señor Baruch IvcherBronstein es un tercero ajeno a la relación jurídico tributaria que existe entre la SUNAT y la [CLRSA]”. (Cfr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 24 de noviembre de 2009, caso IvcherBronstein Vs. Perú [Supervisión de cumplimiento de sentencias], párrafo 26).*

*19. Siguiendo nuevamente a la Corte Interamericana de derechos Humanos, resulta pertinente transcribir lo expresado en el caso IvcherBronstein Vs. Perú: “[L]a Comisión “manif[estó] su especial preocupación por el hecho de que el Estado peruanopretenda cobrar los impuestos generados durante el*

tiempo en que [la empresa] estuvo en manos de los señores Winter y del Estado”, ya que ello “contradice abiertamente el espíritu de la Sentencia de la Corte respecto a la violación del derecho de propiedad y a la libertad de expresión de la parte lesionada”. Así, la Comisión señaló que “la remisión expresa que realiza la Corte para que se faciliten las ‘condiciones’ de uso y goce de los derechos del señor Ivcher como accionista mayoritario implica que se le devuelva la mencionada empresa sin exigirse el pago por los impuestos que hubieran podido generarse durante el período en que ésta se encontraba bajo control del propio Estado peruano y de los accionistas minoritarios”. (...) Que, en este sentido, este Tribunal hace notar que el señor Ivcher solicitó al Tribunal Arbitral “[que] se ordene al Estado peruano asumir el costo de [dicha] deuda tributaria” y que aquél declaró infundada dicha pretensión, ya que consideró, entre otros motivos, que “la deuda tributaria [generada por la Administración Winter] no afecta directamente el patrimonio del [señor Ivcher], sino el de la empresa de la cual es accionista” (supra Considerando 24). Por otro lado, el señor Ivcher presentó un amparo constitucional sobre este punto que fue rechazado el 20 de mayo de 2008 por el Tribunal Constitucional del Perú (supra Considerando 25) ya que, según dicho Tribunal, “el proceso de amparo no es la vía para ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana”. Además, el Tribunal Constitucional señaló que lo resuelto por el Tribunal Arbitral tenía efecto de cosa juzgada y que la Sentencia de la Corte Interamericana se pronunció a favor de “derechos personalísimos del señor Ivcher, mas no de todos los socios que conforman la [CLRSA,] a favor de la que ahora se solicita la condonación de la deuda tributaria”. (...) Al respecto, la Corte recuerda lo establecido en el párrafo 123 de su Sentencia, en el sentido de que, contrario a lo resuelto por el Tribunal Arbitral, la participación en el capital accionario de la empresa constituye efectivamente el bien sobre el

*cual el señor Ivcher tiene derecho de uso y goce, ala luz de la Convención Americana. Por lo tanto, en la medida en que dicho capital accionario se vea afectado por la deuda tributaria generada entre el 1 de agosto de 1997 y el 6 de diciembre de 2000 por la administración de los hermanos Winter, quienes se apoderaron de la empresa ilegalmente con la aquiescencia del Estado, también se verá afectado el derecho a la propiedad del señor Ivcher por actos imputables al Estado.(...)Que, por lo tanto, la Corte considera que la controversia tributaria pendiente de resolución impide que el señor Ivcher pueda ser plenamente restituido en cuanto al uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la CLRSA, tal y como lo era hasta el 1 de agosto de 1997 dado que, según se señaló anteriormente, la deuda afecta el capital de la empresa, sobre el cual el señor Ivcher tiene un derecho a la propiedad como accionista. De esta manera, queda pendiente el cumplimiento del Punto Resolutivo octavo de la Sentencia en este extremo.(...)Que en vista de todo lo anterior y de conformidad con el Punto Resolutivo octavo y el párrafo 123 de la Sentencia, corresponde a las instancias competentes del Estado en esta materia adoptar las medidas y procedimientos necesarios para abstenerse de cobrar aquellos tributos, multas y/o intereses moratorios generados durante la administración ilegal de la CLRSA entre el 1 de agosto de 1997 y el 6 de diciembre de 2000, a fin de restablecer el uso y goce de los derechos del señor Ivcher Bronstein como accionista mayoritario de la empresa, conforme lo era hasta el 1 de agosto de 1997, y con el propósito de garantizar que su derecho patrimonial sobre dicho capital no se vea afectado por deudas tributarias generadas por actos ilícitos del propio Estado". (Subrayado nuestro) (Cfr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2009, caso*

*IvcherBronstein Vs. Perú [Supervisión de cumplimiento de sentencias], párrafos 34, 40, 41, 43 y 45).*

*20. Siguiendo lo expresado por la Corte IDH, en el presente caso, se advierte que la demandante (Panamericana Televisión S.A.) tiene una deuda de carácter tributario exorbitante. Al respecto, no puede soslayarse que si la deuda se ha incrementado exponencialmente ello obedece a que, dolosamente, la gestión anterior dejó de honrarlas. No debemos olvidar que la gestión anterior estaba en manos de Genaro Delgado Parker que fue el administrador judicial designado por el Estado peruano, a través de su Poder Judicial, es decir, Genaro Delgado Parker fue designado por un juez de la república, a quien representaba, para administrar diligentemente Panamericana Televisión S.A., lo que no ha ocurrido. Entonces, el propio Estado también es responsable de dicho incremento, no sólo porque la administración del canal le fue despojada mediante írritas resoluciones judiciales sino porque ha sido la propia desidia de la Administración Tributaria la que ha permitido que la deuda se haya incrementado; pues, pese a tener las herramientas necesarias para cobrar tales tributos, no las utilizó en su momento. Si la actora se ha visto inmersa en tal nivel de endeudamiento con el fisco, es precisamente por la actuación del propio Estado. De ahí que, pretender cobrar la totalidad de la deuda a la actual gestión sin considerar tal situación resulta arbitrario.*

*21. Efectivamente, los pronunciamientos judiciales que despojaron a la actual administración del control del mencionado canal de televisión resultan bastante discutibles. No sólo por haberse recurrido a jueces incompetentes en razón del territorio sino porque, en buena cuenta, pretendieron arrebatárselo a sus*



*legítimos propietarios a través de espurias medidas cautelares y posteriores intentos de modificar la participación accionaria. La opinión pública ha sido testigo de los bochornosos actos que acontecieron en la toma de posesión del canal televisivo por parte de la gestión que, sin mayor remilgo, evadió los tributos.*

*22. Por ello, sorprende la pasividad de la SUNAT en fiscalizar y ejecutar dicha deuda a Panamericana Televisión cuando estuvo administrada por Genaro Delgado Parker. Por más discrecionales que sean sus facultades, éstas no pueden amparar el tratamiento exageradamente permisivo con que ha sido tratada la empresa mientras estuvo gestionada por la administración anterior.*

*23. Aunque los tributos no pueden ser entendidos como sanciones, en las actuales circunstancias, imputar íntegramente la deuda tributaria dejada de pagar al grupo económico perjudicado con dicha suerte de expropiación judicial es, en buena cuenta, una medida carente de racionalidad y, en la práctica, una sanción anómala que termina por vulnerar el derecho de propiedad de la recurrente y que este colegiado se encuentra en la obligación de proteger.*

*24. En consecuencia, habiendo la Corte IDH ejercido, en un caso similar al de autos (caso IvcherBronstein Vs. Perú, Resolución del 24 de noviembre de 2009 [Supervisión de cumplimiento de sentencias]), un control de convencionalidad vertical; este colegiado, siguiendo los lineamientos establecidos por la referida corte, es que debe estimar la presente demanda de amparo.*

Así el Tribunal Constitucional resuelve: Declarar FUNDADA la demanda y, en consecuencia, declarar INEXIGIBLE a la actora la deuda tributaria generada entre el 24 de febrero de 2003 y el 8 de junio de 2009.

#### **5.1.6. Caso testamento de Riva Agüero**

En este acápite analizaremos la sentencia de fecha 17 de marzo de 2010 – Expediente N° 03347-2009-PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Pontificia Universidad Católica del Perú contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 939, su fecha 24 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de amparo que interpuso contra Walter Arturo Muñoz Cho, en su calidad de miembro de la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, solicitando: a) Se abstenga de intervenir directa o indirectamente, a través de la Junta Administradora antes mencionada o por cualquier otro medio, en el ejercicio pleno del derecho de propiedad que le corresponde sobre los bienes que ha heredado de don José de la Riva Agüero y Osma, respetando así la voluntad del testador y los acuerdos adoptados por la propia Junta Administradora en su sesión del 13 de julio de 1994, e inhibiéndose de cualquier pretensión para gestionar o administrar los bienes de la PUCP, y b) Se abstenga de pedir directa o indirectamente, a través de la Junta Administradora antes mencionada o por cualquier otro medio, la revisión del acuerdo de la Junta Administradora del 13 de julio de 1994 que interpretando la voluntad testamentaria de don José de la Riva Agüero y Osma, declaró que los bienes heredados por la PUCP debían ser administrados por ella, correspondiéndole a la Junta únicamente cumplir los encargos y las mandas del testador.

Respecto a esta demanda el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 9 de julio de 2007, declaró infundada la excepción propuesta y saneado el proceso, y con fecha 22 de octubre de 2007, declaró improcedente la demanda, por considerar que las cartas de fechas 15 de febrero y 1 de marzo de 2007 remitidas por el emplazado, no constituyen una amenaza cierta e inminente de violación al derecho de propiedad de la PUCP; que no es ilegal ni inconstitucional o vulneratorio del derecho a la inmutabilidad de los acuerdos que la misma Junta Administradora pueda reevaluar, rectificar o ratificar los acuerdos que haya adoptado; y que el contenido de las cartas remitidas por el emplazado a la PUCP al referirse a solicitudes y posiciones con respecto a la administración de los bienes de don José de la Riva Agüero y Osma, no constituyen actos de intervención en su gobierno por lo que tampoco pueden considerarse que amenacen de manera cierta e inminente su autonomía universitaria. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia bajo los fundamentos de que lo solicitado en las cartas remitidas por el emplazado a la PUCP constituye una manifestación del derecho de toda persona a ejercitar una pretensión material en forma extrajudicial, por lo que la perpetuidad de la Junta Administradora al constituir un conflicto que conlleva la correcta interpretación de los testamentos de don José de la Riva Agüero y Osma debe ser dilucidado no mediante el proceso de amparo sino mediante un proceso judicial ordinario; que al momento de la interposición de la demanda y de la emisión de la sentencia no se ha probado la existencia de actos actuales y directos que lesionen la autonomía universitaria de la PUCP; y, que el derecho a la inmutabilidad de los acuerdos tampoco se encuentra amenazado de manera cierta e inminente, pues no existe algún acto ilegal o arbitrario que pretenda desconocer el acuerdo del 13 de julio de 1994.

Dada esta controversia, el Tribunal Constitucional llega a las siguientes conclusiones:

a) No obstante que el testamento de Riva Agüero hace alusión a una "propiedad absoluta" que hereda la Universidad Católica, esta última, por imperio de la ley, heredó una propiedad con las propias limitaciones impuestas por la legislación vigente a todo el derecho de propiedad, limitación a la que se suma aquella dispuesta por el testador, en su Testamento de 1938, al ordenar que sea una Junta - y no la propia Universidad, quien administrara los bienes heredados.

b) Durante cincuenta años la Junta dispuesta por el causante administró sin objeciones y con éxito los bienes heredados por la Universidad, lo que significa una conformidad de medio siglo, de la propia heredera, sobre la voluntad del testador.

c) La Junta Administradora por acuerdo interno de tal entidad, en 1994, decidió interpretar los testamentos del causante de 1933 y de 1938, siendo que en el último de ellos el testador instituye la creación de la propia Junta, con el fin de administrar la propiedad heredada, al igual que ocuparse de ciertas mandas y encargos religiosos. Tal interpretación deviene en la afirmación de otorgarle a la Junta únicamente el encargo de ocuparse de las mandas religiosas, pasando la administración de los bienes heredados al dominio y dirección de la propia Universidad.

d) La interpretación aludida contradice aquella que fue materia de pronunciamiento judicial, en ocasión en la que la Universidad, en 1957, requirió por esa vía el reconocimiento de la propiedad heredada y, en tal virtud, el Juez que la concede determina que la misma procede de conformidad al testamento de 1938 que modificó el de 1933.

e) En atención a lo anterior, el acuerdo de la Junta de 1994 deviene ineficaz y no puede surtir efectos jurídicos.

f) Toda la doctrina revisada, además de las normas internas aplicables, apuntan de manera meridiana al hecho de que, la última voluntad del testador, fue designar una Junta Administradora, insustituible y perpetua, para administrar los bienes heredados por la Universidad.

g) Las gestiones, comunicaciones y reclamos del representante del Arzobispado ante la Junta, pretendiendo la revisión del acuerdo de 1994 y de otros, no constituyen amenazas o agravios, en tanto que pertenecen al ejercicio de un derecho exigible y que tiene como fin resguardar y restituir la última voluntad del testador.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional resuelve el caso declarando infundado el recurso de agravio constitucional.

#### **5.1.7. Caso El Frontón**

La sentencia corresponde al EXP N° 01969-2011-PHC/TC, emitida el 14 de junio de 2013, en mérito al Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Bocanegra Chávez contra la resolución expedida en mayoría por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 29 de octubre de 2010, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de fecha 03 de marzo de 2009, interpuesta por Bocanegra Chávez a favor de los señores José Santiago Bryson de la Barra, Juan Alberto Agreda Huamán, Edgar San' Villanueva Paica, Jorge Enrique Curzo Ramírez, Augusto Ramos Toledo, Julio Morales Palacios, Cilas Timoteo SabriaPanano, José del Carmen Bellodas Arroyo, Humberto Madrid Sosa, Edgar Félix Rojas Poma, Nicolás

David Romero Saldaña, Carlos Eduardo Castillo Vega, Federico Antonio Pineda Alache, Segundo Rosado Izquierdo Quispitongo, Antonio Jara Montoya, Américo Manuel Martínez Cárdenas, Hipólito Fermín Silva Torres, José Antonio Salcedo García, Eduardo Luis Llontop de la Cruz, Félix Alejandro Álvarez Morales, Toribio Dioses Lupu, Julio César Casusol Martínez y William Puerta Calderón.

En dicha demanda, se solicitó que se declare nulo el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial con fecha 9 de enero de 2009 (Exp. N° 2007-00213-0-1801-JR-PE-04). Alega que cuando se emitió dicha resolución judicial el juez emplazado tenía conocimiento de que una sala penal superior había declarado prescrita la acción penal para el caso del coprocesado Teodorico Bernabé Montoya, lo que incluso fue confirmado por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 3173-2008-PHC/TC). Al respecto, considera que los efectos de la referida sentencia le son extensivos al caso de los favorecidos al tratarse de sujetos en una situación idéntica. En este sentido considera que siendo los favorecidos, al igual que Teodorico Bernabé Montoya, presuntos autores de los hechos ocurridos en el establecimiento penal San Juan Bautista (El Frontón) el 19 de junio de 1986, les corresponde igualmente la prescripción de la acción penal.

Es así que el 29 de enero de 2010, el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declaró infundada la demanda de habeas corpus, por considerar que la prescripción no es un derecho fundamental. De otro lado, argumenta que la sentencia de habeas corpus expedida a favor de Teodorico Bernabé Montoya tiene únicamente efectos *inter parte*, por lo que no se puede solicitar que sea aplicada a sus coprocesados, Resolución

que es confirmada por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

A fin de resolver el proceso, el Tribunal Constitucional argumentó que la motivación relacionada con determinar si un hecho constituye o no un crimen de lesa humanidad, radica en dilucidar si los hechos configuran alguno de los delitos previstos en el artículo 7 1°, y si, de acuerdo con las precisiones del artículo 7.2° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Así, el Tribunal señala que el auto de apertura de instrucción cuestionado, el juez emplazado al abrir proceso contra los favorecidos consideró que la conducta típica debía subsumirse en el tipo penal de asesinato previsto en el artículo 152° del Código Penal de 1924, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, y que la acción penal no habría prescrito, toda vez que se trataría de un crimen de lesa humanidad. Así según la propia sentencia, la calificación que el auto apertorio consistió en señalar que “existen indicios más que suficientes que en el develamiento (sic) del motín producido en el centro de reclusión san Juan Bautista, ubicado en la Isla el Frontón\_ se produjo el asesinato con ferocidad de un numero cuantioso de internos que se habían rendido, dentro de los cuales se encontraban los agraviados, contra quienes los efectivos de la Infantería de la Marina. abrieron fuego cuando no tenían la menor posibilidad de oponer resistencia, como también demolieron el pabellón, aplastando a quienes aún con vida se encontraban dentro del mismo", hechos que según el Tribunal, el Juzgado consideró como consecuencia

de un “patrón Sistemático; al considerar que en ese entonces, con la finalidad de combatir a la violencia subversiva, se había propiciado acciones encubiertas en contra de personas a quienes se consideraba como elementos sediciosos, generando graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional estima que no se puede derivar de manera mecánica que en dicho contexto todo acto de violencia cometido desde el poder estatal se convierta *per se* en expresión de un ataque sistemático y de este modo en un crimen de lesa humanidad. Es necesario, por tanto, vincular el acto y el ataque sistemático, por lo que debe existir un nexo entre ambos; además señala que en el auto de apertura de instrucción no se cita ningún medio probatorio de la existencia de un plan previo para acabar con la vida de los internos a través de un uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales, por lo que este Tribunal no puede avalar la calificación del presente caso como crimen de lesa humanidad que adopta el juez emplazado.

Otro punto que precisa el Tribunal Constitucional es que los hechos materia del proceso penal no pueden ser entendidos como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, puesto que resulta evidente que ello no es así, dado que los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en el CRAS San Juan Bautista (El Frontón), no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión, quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado. Es así que el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden, y como resultado de decisiones y acciones



tornadas durante el desarrollo de los hechos, por lo que se descarta que la actuación del Estado haya sido preconcebida o planificada para obtener como resultado la eliminación física de los internos.

Señala también que si bien es cierto que en el desvelamiento del motín se incurrió en un excesivo uso de la fuerza y a su vez en una deficiente investigación por parte del Estado, lo que llevó al Estado peruano a ser condenado ante instancias internacionales, no es posible afirmar que en esos años las ejecuciones extrajudiciales hayan sido una práctica común por parte del Estado, por lo que en el caso no hay elementos para determinar que el hecho respondió a una política de Estado; precisando finalmente que si bien los hechos materia del proceso penal debe ser investigados en virtud del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éstos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos.

Según estos fundamentos el Tribunal Constitucional resuelve en los siguientes términos:

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, NULO el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial con fecha 9 de enero de 2009 (Exp. N° 2007-00213-0-1801-JR-PE-04), en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la imputación.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo en que se cuestiona el haberse abierto proceso penal contra los favorecidos y. en consecuencia, continúese con el proceso penal a fin de que el Estado peruano cumpla con sus compromisos internacionales asumidos con la suscripción de tratados internacionales de protección de los derechos humanos. (...)

#### **5.1.8. Caso Roberto Torres Gonzáles**

Se analiza la sentencia correspondiente al EXP. N.º 04298-2012-PA/TC, de fecha 17 de abril de 2013, que resuelve el Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Torres Gonzales Cisneros contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 11 de septiembre de 2012, que declaró improcedente la demanda de amparo, interpuesta el 24 de mayo de 2012, por Leny Patricia Vásquez Castro a favor de don Roberto Torres Gonzales, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y contra el Procurador Público del Poder Judicial; solicitando se deje sin efecto la Sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, que lo condena por el delito de peculado de uso a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, emitida en el Exp. N° 1488-2011-96-1706-JR-PE-06, fundamentando la demanda en la vulneración de los derechos de defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en derecho, y de los principios del juez natural y de legalidad procesal penal del favorecido. La sentencia del Tribunal Constitucional establece resume los fundamentos de la demanda precisando que en base a noticias periodísticas de fechas 26 y 27 de enero de 2011, la Tercera Fiscalía Provincial

Penal Corporativa de Chiclayo inició una investigación por la presunta comisión del delito de peculado de uso y en su oportunidad formuló acusación contra el favorecido. Señala que el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo en el Exp N° 1488-2011 emitió sentencia absolutoria; que, sin embargo, ante el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque y el Ministerio Público, el proceso fue elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la cual emitió la sentencia condenatoria.

Asimismo, al efectuar un resumen de los antecedentes del caso señala que el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo declara fundada la demanda por considerar que de la lectura de la sentencia condenatoria se advierte que no se explica y justifica el bien jurídico protegido por el tipo penal de peculado de uso, no se precisa el perjuicio económico que se ha causado, se ha obviado la ejecutoria suprema dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el Exp. N° 05-2008, caso Luis Alberto Mena Núñez, la cual expresa un criterio opuesto al adoptado por los jueces demandados, ni se ha explicado por qué debe realizarse una interpretación restrictiva y no extensiva de la excepción contenida en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal; por lo que la sentencia carece de una debida motivación interna. Además, considera que se ha violado el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, pues el juez superior Balcázar Zelada interrumpió intempestivamente su licencia para participar de la audiencia y el juzgamiento del recurrente, además de haber aparecido en unas fotografías difundidas por la prensa local reunido con una persona allegada a la primera regidora de la Municipalidad de Chiclayo; Sin embargo, la Sala Especializada de Derecho Constitucional revoca la apelada y la declara improcedente por considerar que al no haber impugnado (recurso

de casación) la sentencia de fecha 22 de mayo de 2012, el favorecido dejó consentir dicha resolución.

En este caso, luego de analizada la controversia, el Tribunal Constitucional señala:

*17. Este Tribunal aprecia que si bien la Sala emplazada ha llevado a cabo una interpretación correcta del sentido de la disposición normativa contenida en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, en tanto el “uso personal del vehículo”, excluido de tipificación penal, no puede incluir un uso ajeno al funcionario, léase uso “familiar” o “amical” del mismo, dado que la razón de la exención normativa es la facilitación del desenvolvimiento y seguridad del alto funcionario (por lo que se permite un uso más allá de las funciones oficiales), también es cierto que una interpretación excesivamente rígida de esta exclusión puede llevar a desnaturalizar el sentido mismo de la excepción típica. En efecto, si bien el vehículo oficial del alto funcionario no puede ser destinado al “uso personal” del cónyuge, hijos u otros familiares del funcionario o como vehículo que sirva de movilidad permanente a otra persona distinta del funcionario (conducta que debe ser calificada como peculado de uso), tampoco puede considerarse que cualquier uso que se haga del vehículo por una persona distinta del funcionario constituye una conducta típica. Y es que muchas veces el vehículo oficial del alto funcionario, de modo inevitable, es utilizado por otras personas sin que ello distorsione necesariamente el “uso personal” que el funcionario hace de él. Si tenemos en cuenta el círculo de familiares o personal de confianza que desarrollan múltiples actividades conjuntamente con el alto funcionario o por encargo de él, resulta desproporcionado entender que en cada uno de estos casos, característicamente circunstanciales, se tipifica el*

*delito de peculado de uso, máxime si las actividades desarrolladas con los integrantes de la familia nuclear, principalmente, pueden considerarse como parte de las actividades personales del funcionario, de un modo prácticamente indesligable.*

*Así, una línea de aplicación rígida de la interpretación restrictiva efectuada por la Sala emplazada, en el sentido de que la exención típica “servicio personal por razón del cargo”, se llena de contenido, en exclusividad, con los usos estrictamente individualizados del funcionario, de modo que sólo éste puede usar dicho vehículo, supondría restringir en extremo el sentido de la exención, y convertiría la prerrogativa en una camisa de fuerza que la haría casi impracticable, pues el funcionario estaría siempre cuidándose de que nadie distinto de él se encuentre en el vehículo, ante la amenaza de que un comportamiento distinto configuraría tipicidad por peculado de uso. Una exigencia de razonabilidad en la aplicación de la exención estipulada en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal se impone, por tanto, de modo que no mantenga a dichos funcionarios en un régimen de persecución desproporcionada, ni les abra posibilidades de abuso del referido bien público.*

*18. En dicho contexto, este Tribunal considera que si bien la interpretación restrictiva que efectuó la Sala emplazada fue correcta en cuanto al sentido de la excepción típica prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, dado que consideró que “el uso personal del vehículo” excluye “el uso familiar” del mismo, existe una motivación insuficiente en cuanto a los términos en los cuales cabe entender que un “uso familiar” del vehículo resulta excesivo y totalmente ajeno a las razones de funcionalidad de la excepción penal en cuestión, dado que, como*

*ya se dijo existe la posibilidad de que en algunos casos dicho “uso familiar” no constituya una acción típica. No ha efectuado, pues, la Sala emplazada un examen de razonabilidad de los términos en los cuales cabe excluir ciertas acciones de la esfera de aplicación de la excepción prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal o de los términos en los cuales cabe incluir dichas acciones. En el caso específico del Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, don Roberto Torres Gonzales, la Sala no ha precisado por qué es que el hecho de trasladar a sus hijos al Jockey Club de Chiclayo en el vehículo oficial, un día en que el Alcalde había viajado a la ciudad de Lima, constituye un “uso familiar” del vehículo, ajeno a todo margen de razonabilidad, que se encuadre más bien como un uso exclusivo y sistemático del vehículo oficial por personas distintas del funcionario. En consecuencia, este Tribunal estima que la sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ha afectado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.*

*19. Por último, en cuanto al alegato de que la Sala Penal emplazada no ha tomado en cuenta la ejecutoria suprema dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el Exp. N° 05-2008, caso Luis Alberto Mena Núñez, la cual expresa un criterio opuesto al adoptado por los jueces demandados, este Tribunal estima que si bien dicha ejecutoria podía ser ilustrativa en cuanto a la definición de la excepción típica, la misma no es vinculante, pues representa un único criterio que no ha sido confirmado por otras ejecutorias o fijado como doctrina jurisprudencial en un PlenoCasatorio de la Corte Suprema.*

En base a tales argumentos el Tribunal Constitucional resuelve:

1. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo relacionado con la vulneración de los derechos al juez predeterminado por ley y al juez imparcial.

2. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, NULA la Sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, Expediente N° 1488-20111-96-1706-JR-PE-06, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que condenó a Roberto Torres Gonzales por delito de Peculado de Uso a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. DISPONER que la Sala emplazada emita nueva resolución, teniendo en cuenta lo expresado en los fundamentos 17 y 18 de la presente sentencia.

## 5.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Luego de haber desarrollado brevemente el contenido de las sentencias materia de análisis podemos señalar lo siguiente: En efecto, todas las sentencias que han sido analizadas tienen un contenido cuanto menos enriquecedor, desde el punto de vista doctrinario y aleccionador en cuanto al desarrollo de conceptos y análisis de figuras jurídicas que rodeaban las controversias sometidas a su jurisdicción. Sin embargo, todas ellas presentan al menos una arista controversial, en cuanto todas han entrado en un claro conflicto con otros ámbitos lo que deja entrever posibles extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones.

Así tenemos por ejemplo en el caso de la **sentencia relativa al arancel del cemento**, el cuestionamiento inicial a la sentencia está referido a que el Tribunal Constitucional solo debió ordenar se admita la demanda y no emitir un pronunciamiento sobre el fondo; así lo estimo uno de sus miembros – el Magistrado Vergara Gotelli, quien señaló que efectivamente el motivo del recurso era el rechazo liminar de la demanda, por lo que en todo caso debió ordenarse la admisión de la demanda, pues el resolver sobre el fondo solo se aplica en supuestos excepcionales para darle la razón al demandante en casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan tutela urgente como por ejemplo grave estado de salud; circunstancias que no se presentaron en el caso bajo análisis; por lo que coincidimos en que en su oportunidad solo debió disponerse la admisión de la demanda de amparo interpuesta y no resolver respecto a la aplicación de la norma cuestionada, lo cual no era materia de controversia.



Ahora bien ya analizando los fundamentos de la decisión, se advierte que en ella se encuentra claramente reconocido que las potestades arancelarias le corresponden al Poder Ejecutivo, como el propio Tribunal lo reconoce a lo largo de su pronunciamiento; sin embargo, y si bien también el Tribunal está facultado para garantizar el respeto a derechos fundamentales como en este caso el derecho a la igualdad, lo cierto es que invade un ámbito que no es de su competencia al reestablecer la tasa anteriormente fijada; ello por cuanto una vez establecidos los lineamientos era muy fácil que el ejecutivo, dentro del ejercicio de sus atribuciones modifique el arancel cuestionado o motive su permanencia.

Cabe tomar en cuenta, que en este caso se declaró la inaplicabilidad de una norma, volviendo las cosas al “estado anterior”, circunstancia que ni siquiera es posible en la aplicación de control concentrado (inconstitucionalidad de una norma); pues en tales casos entra a tallar lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional en su artículo 83° al consagrar: “Las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no conceden derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la Constitución. **Por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado**” (El resaltado es nuestro).

En este sentido el magistrado Landa Arroyo plasmó su voto singular también, señalando que en el presente caso la utilización del amparo para comprobar la validez constitucional de una norma autoaplicativa no sólo tendría un efecto cercano a las del control abstracto (si bien no expulsa la norma del ordenamiento, le quita validez y eficacia), sino que incluso su uso podría tener consecuencias más amplias y gravosas, pues ni las inconstitucionalidades tienen efecto retroactivo; entonces se tiene que efectivamente ha existido una extralimitación en el ejercicio de funciones del TC y no una ausencia de límites los cuales efectivamente están plasmados en el ordenamiento procesal constitucional vigente.

En el caso de la **sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la libertad – excarcelación de Alberto Quimper Herrera** resulta claro que el pronunciamiento cuestionado a través del Hábeas Corpus planteado por Alberto Quimper Herrera en principio se encontraba debidamente motivado, y no solo ello la revocatoria de una medida como lo es la detención domiciliaria correspondía a una valoración por parte del Juzgado competente dentro del plazo de la detención domiciliaria.

La citada sentencia, también dio pie a pronunciamientos singulares como el del Magistrado Beaumont Callirgos, quien señaló que a su criterio la resolución de fecha 21 de octubre del 2011, obrante a fojas 60, que revoca el arresto domiciliario imponiendo el mandato de detención, se encuentra debidamente motivada y se sustenta en el incumplimiento de las reglas de conducta del accionante.

Asimismo el magistrado Álvarez Miranda señala que la Resolución cuestionada se ha emitido en base a una causal legítima, precisando además que la determinación de los alcances del incumplimiento de las restricciones impuestas ha sido reservada al ámbito de la discreción judicial, es decir, corresponde a los jueces ordinarios establecer *los supuestos concretos de no cumplimiento de las restricciones impuestas*, entonces el análisis deberá realizarse caso por caso, en base al principio de proporcionalidad, sin que ello obste que pueda ejercerse un control constitucional *ex post*.

Por otro lado, en cuanto al **caso “Píldora del día siguiente”**, del análisis de la misma se tiene que, al igual que las demás sentencias que se han revisado está dotada de un alto contenido doctrinario y de un gran desarrollo conceptual; sin embargo una vez más encontramos una sentencia que nuestro Tribunal Constitucional se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el Tribunal Constitucional ordena al Ministerio de Salud se abstenga de distribuir gratuitamente el Anticonceptivo Orla de Emergencia, lo que roza directamente con la política de salud pública, que es potestad del Estado, más allá de que el tema del carácter abortivo o no de dicho método anticonceptivo es por sí mismo complejo; asimismo dicha prohibición podría también atentar contra los derechos de las mujeres que acuden a la salud pública y no permitirles acceder a dicho método y generaría una postura desigual al estar totalmente permitido el expendio de dicha píldora en los establecimientos privados y farmacias.

Tal coyuntura generó incluso que en el año 2016, en el Exp. 30541-2014, Proceso de Amparo seguido ante el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró fundada la medida cautelar ordenando al Ministerio de Salud la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia, que entre sus fundamentos expresó precisamente que en ese entonces las únicas mujeres que no podían acceder al AOE eran las mujeres de bajos recursos al encontrarse prohibida su distribución gratuita, lo cual era una forma de discriminación.

En el **caso del reingreso de los magistrados a la carrera judicial o fiscal**, como se advierte del texto constitucional, el Constituyente Peruano en ejercicio del poder soberano del pueblo y en pleno consonancia con la significación jurídica del proceso de ratificación, ha decidido que los jueces y fiscales no ratificados no puedan reingresar a la carrera judicial, yendo en contra de la propia Constitución, la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional en la sentencia arriba descrita, al concluir que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la carrera judicial es incongruente con relación a la propia naturaleza de la institución, puesto que la prohibición de reingreso a la carrera judicial como consecuencia de la no ratificación de un juez o fiscal, se condice con la naturaleza jurídica del mismo, al significar la no ratificación, afirmar la no idoneidad del Juez o Fiscal para ejercer la función jurisdiccional, debido a su manifiesta ineficacia, irresponsabilidad o corrupción en el ejercicio de la función. Asimismo con el proceso de ratificación no se vulnera derecho constitucional alguno ya que el mismo debe ser llevado siguiendo todas las exigencias propias del debido proceso.

El Tribunal Constitucional por otro lado, compara los incisos 2° y 3° del artículo 154° de la Constitución Política, comprobando que solamente en el primer inciso es donde expresamente se contiene la prohibición de reingreso al Poder Judicial o al Ministerio Público por parte de los jueces o fiscales no ratificados y a partir de esta comprobación, el Tribunal Constitucional sostiene que el Constituyente peruano ha incurrido en incongruencia, lo cual necesariamente exigiría considerar los incisos 2 y 3 del artículo 154° en referencia al derecho a la igualdad o prohibición de discriminación proscrito en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución y poder concluir que no es posible administrar la prohibición de reingreso a los jueces y fiscales no ratificados. Sin embargo, una interpretación coherente, unitaria y sistemática no puede ser la optada por el Supremo Intérprete, porque la acusación de discriminación que plantea el Tribunal Constitucional es falsa por cuanto no se puede interpretar el artículo 154 inciso 3 de la Constitución Política como si ordenase solamente que está permitido el reingreso de los jueces y fiscales constituidos en un proceso disciplinario, pues la Constitución ni ha ordenado ni lo ha prohibido.

Además porque en el Ordenamiento Jurídico Peruano tanto los jueces y fiscales no pueden reingresar al Poder Judicial. Los jueces y fiscales no ratificados no pueden reingresar a la carrera judicial, lo dispone expresamente el texto constitucional (artículo 154 inciso CP) y que los jueces y fiscales destituidos por proceso disciplinario tampoco pueden reingresar a la carrera judicial, lo dispone expresamente el artículo 177 inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el caso de la sentencia recaída en el **Recurso de Agravio Constitucional planteado por Panamericana Televisión**, una vez más el Tribunal Constitucional nos muestra como efectivamente no son pocos los casos en que se actúa más allá de los límites existentes al ejercicio de sus funciones y su autonomía procesal, habiendo declarado inexigible la deuda tributaria de la televisora citada.

En este caso, se advierte a juicio de la investigadora, un pleno atentado contra la seguridad jurídica, invadiéndose de manera extrema un fuero que no es de competencia del Tribunal Constitucional, dejando en la inexigibilidad una deuda tributaria que corresponde a una persona jurídica y no por quien se haya desempeñado como su titular, amparándose además en que el incremento de dicha deuda se debe a la acción dolosa de la gestión antecesora.

En este sentido quedaría establecido que las deudas asumidas por determinada gestión, luego de su cambio o transferencia se tornarían en inexigibles lo que contraviene como hemos señalado no solo los derechos de los acreedores a la satisfacción de sus acreencias, sino también a la seguridad jurídica que debe regir a todo Estado de Derecho.

Otrasentencia cuestionable emitida por el Tribunal Constitucional es la contenida en el **Exp. 3349-2009-PA/TC**, cuyo resumen hemos plasmado en el apartado pertinente; en este caso el cuestionamiento primordial es precisamente que dentro de su función ha resuelto conflictos que no han sido sometidos a su competencia, y que deben ser resueltos por la justicia ordinaria como la validez del Acuerdo de Junta Administradora de fecha 13 de julio de 1994, las potestades de la Junta Administradora e incluso aspectos relativos a la voluntad testamentaria de José de la Riva Agüero y Osma; cuando en realidad se debió determinar si existía una amenaza inminente al derecho constitucional a la inmutabilidad de los acuerdos al pretender el demandado revisar el acuerdo del Junta Administradora citado y si ello vulneraba la autonomía universitaria, lo cual podría haberse resuelto sin entrar a tallar en temas que como hemos señalado se encuentran reservados a la justicia ordinaria y no son materia de proceso de amparo.

En cuanto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al **caso El Frontón** que ha sido desarrollada en el apartado anterior, debemos precisar que se ha declarado nulo un auto apertorio de instrucción, procediendo a valorar la calificación jurídica que el Juez Penal realizó en uso de sus facultades de discrecionalidad; más aún si la investigación y juzgamiento de los hechos acontecidos correspondía al Estado en cumplimiento no solo de las funciones constitucionales establecidas a sus Poderes sino también a los compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos; siendo dentro de esas atribuciones que el Juez Penal el llamado a realizar la calificación que ameritaba la apertura de instrucción, más aun tomando en cuenta que ello no implicaba resolución sobre el fondo y cabía incluso una posible absolución.

Finalmente el caso en el que se declaró nula la sentencia defecha 22 de mayo del año 2012 que condenó al Ex Alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles por la comisión del delito de peculado de Uso; en ese caso como hemos observado se ha efectuado un cuestionamiento a la motivación de la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, procediendo a efectuar un pronunciamiento en contravención con las facultades discrecionales de la Sala Penal que las emitió. Como es claro el Ex Alcalde en la vía constitucional pretendía cuestionar los fundamentos de la sentencia penal, y que la misma sea declarada nula; circunstancia que es amparada por el Tribunal Constitucional pese a que la labor de juzgamiento y valoración probatoria corresponde únicamente al Juez Penal, pues caso contrario cualquier proceso penal podría ser llevado a Sede Constitucional, convirtiéndolo en una tercera instancia para cuestionar sentencias condenatorias, lo cual no se condice en absoluto con la jurisdicción constitucional, menos aún con la labor del Tribunal Constitucional; más aún si se toma en cuenta que el propio Ex Alcalde dejó consentir la sentencia



que lo condenaba. En conclusión y tal como hemos podido verificar en el análisis de algunas de las sentencias más controversiales emitidas por el Tribunal Constitucional efectivamente dentro del ejercicio de sus funciones viene cometiendo excesos en contraposición con los límites legales, materiales y sustanciales que rigen su accionar. Este análisis nos permite elaborar una proyección de la problemática que podría presentarse en muchos otros casos que por no ser mediáticos como los analizados y precisamente por su poca “publicidad” no dan pie al análisis de las consecuencias perjudiciales y atentatorias contra el propio contenido de los derechos fundamentales cuya protección y prevalencia es precisamente una de las razones de ser del Tribunal Constitucional.

#### **CUADRO N° 02: CUADRO DE CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS**

	<b>No se advierte extralimitación</b>	<b>%</b>	<b>Se advierte extralimitación</b>	<b>%</b>
<b>Arancel del cemento</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>Petro audios</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>Píldora del día siguiente</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>Testamento de Riva Agüero</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>Reingreso de jueces y fiscales</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>La condonación de la deuda de Panamericana</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>El caso El frontón</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>
<b>Beto Torres y el Peculado de Uso</b>			<b>X</b>	<b>12.5</b>

<b>Total</b>				<b>100%</b>
--------------	--	--	--	-------------

### **5.3. PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO – PRÁCTICO**

#### **5.3.1. Base filosófico – constitucional**

El Estado Peruano tiene por finalidad garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales, esa finalidad no escapa al ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional; quien debe ante todo y en cualquier caso que se someta a su conocimiento regir sus actuaciones al respeto de dichos derechos, y de las garantías que la Constitución Política establece.

En ese sentido el Tribunal Constitucional debe actuar dentro de los límites establecidos por nuestro ordenamiento, como es el caso del Código Procesal Constitucional que rige su actuación; siendo que ello en nada obsta del Principio de Autonomía Procesal que rige su institucionalidad, pues ello no implica ni justifica en modo alguno el ejercicio arbitrario de atribuciones por parte del citado Tribunal en contravención a los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, razonabilidad, debido proceso e interdicción de la arbitrariedad.

#### **5.3.2. Base Normativa**

Dentro del marco normativo legal que ampara nuestra propuesta, encontramos:

El artículo 43 de la Constitución que establece lo siguiente: “La República del Perú se organiza según el principio de separación de poderes”. Este apartado condiciona al Tribunal

Constitucional a no ampliarse las competencias que le han sido conferidas por la Constitución.

El Artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.

El Artículo III del Título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que: “Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socialización procesales.”

### **5.3.3. Propuesta legal**

Entonces, consideramos que si bien las actuaciones del Tribunal Constitucional deben estar regidas por el respeto a los derechos y garantías que se han señalado, resulta pertinente que de manera expresa se normativice dicho sometimiento en el contenido de su Ley Orgánica.

Así proponemos la modificación del artículo 2° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la siguiente forma:

#### **Texto original:**

Artículo 2.- Competencia

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los procesos que contempla el artículo 202 de la Constitución.

El Tribunal puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como sobre el régimen de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbito de la presente Ley. Dichos reglamentos, una vez aprobados por el pleno del Tribunal y autorizados por su Presidente, se publican en el Diario Oficial El Peruano.

**Propuesta de modificación:**

Artículo 2.- Competencia

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los procesos que contempla el artículo 202 de la Constitución; **tal competencia debe desempeñarse dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Constitucional bajo el respeto al debido proceso y al principio de interdicción de la arbitrariedad.**

El Tribunal puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como sobre el régimen de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbito de la presente Ley. Dichos reglamentos, una vez aprobados por el pleno del Tribunal y autorizados por su Presidente, se publican en el Diario Oficial El Peruano.

## CONCLUSIONES

1. Luego del desarrollo de la presente investigación podemos establecer que sí existen límites al ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional sin embargo ellos no resultan eficaces a fin de evitar la posibilidad de exceso en las decisiones emitidas en determinados casos por parte del Tribunal Constitucional del Perú.
2. El Tribunal Constitucional como parte de la jurisdicción constitucional, está llamado no solo a cumplir con las atribuciones y competencias que le han sido conferidas, sino que el ejercicio de las mismas debe guardar consonancia con la defensa y prevalencia de la constitucionalidad, entendida como la concordancia entre la Constitución y las demás normas que conforman el sistema jurídico; incluyendo las normas que reconocen sus competencias.
3. El Tribunal Constitucional se rige por el Principio de Autonomía Procesal, según el cual tiene potestades de interpretación e integración de las normas constitucionales, estas potestades le otorgan un importante grado de libertad y responsabilidad para la emisión de doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes.
4. Sin embargo, las potestades y competencias que le han sido conferidas al Tribunal Constitucional, deben desarrollarse dentro de los límites establecidos en la normatividad Constitucional de nuestro Estado, como lo es la propia Constitución y el Código Procesal Constitucional; así como en consonancia y respeto a los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, razonabilidad, debido proceso e interdicción de la arbitrariedad.
5. Pese a lo señalado, en las sentencias que han sido materia de análisis en la presente investigación se ha determinado que en los últimos años, el Tribunal Constitucional viene cometiendo exceso en el ejercicio de sus competencias lo que contraviene no solo el ordenamiento legal constitucional sino que va directamente en contra de su propia naturaleza.

## **RECOMENDACIONES**

1. Recomendar que se evalúe la propuesta de modificación legislativa planteada en la presente investigación como una forma de coadyuvar a paliar la problemática actual planteada, reconociendo que si bien la misma no engloba una solución definitiva podría servir como parámetros en el desenvolvimiento de la función del Tribunal Constitucional
2. Promover a nivel de las Facultades de derecho y las Escuelas de Post Grado, se efectúen debates y conversatorios de análisis de las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, ello a fin no solo de ahondar en conocimientos y sentido crítico respecto a la labor del citado organismo; sino además tomando en cuenta que en ambos campos se forman los posibles futuros miembros del mismo, fomentando la toma de conciencia respecto a la trascendencia de sus competencias.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ACUÑA CHAVEZ, Araceli. "Funciones y Competencias del Tribunal Constitucional Peruano". Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2014.
2. BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional comparado. Editorial del Fondo de la Cultura Económica. México D. F, 1996.
3. CARPIZO, Jorge. *"El Tribunal Constitucional y sus límites"*, Editorial Jurídica Grijley, 2da. Edición, Lima. 2017.
4. CASTILLO CORDOVA, Luis, "El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial", Palestra, 1ra. Edición, Lima, 2008.
5. CASTRO RIVERA, Edwin y Sergio J. CUAREZMA TERÁN. (Directores). 'A 21 años de la Constitución Política: Vigencia y desafíos'. Managua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 2008.
6. CERVANTES, Luis. "Los tribunales constitucionales en el derecho comparado: Un estudio introductorio sobre sus antecedentes y situación jurídica actual." Estudios básicos de Derechos Humanos, VI. San José, IDH, 1996.
7. CÓRDOVA MEDINA, Pablo Alexander. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales. Gaceta Constitucional N° 45. Setiembre, 2011.
8. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José. *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI*. Ed. Tecnos, Madrid, 2002.
9. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *"Ensayos sobre derecho*

*Procesal Constitucional*”, México, Porrúa y CNDH, 2004.

10. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. ‘El principio de autonomía procesal. Notas para su aplicación material’. En *Pensamiento Constitucional*, N° 19, 2014. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2015.
11. GARCIA TOMA, Víctor. “*Teoría del Estado y Derecho Constitucional*”. 1ra Edición. Palestra Editores, Lima, 2005.
12. HÄBERLE, Peter. “Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar”. Lima: Palestra-Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 2004. pp. 49 y 50. *Revista Oficial del Poder Judicial* 1/1 2007.
13. HUERTA GUERRERO, Luís Alberto, “El Tribunal Constitucional del Perú (Apuntes para una reforma de sus competencias)”. En *Las tareas de la transición democrática. Serie: Democracia N° 01*. Comisión Andina de Juristas, Lima, 2001.
14. LANDA ARROYO, César. *Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú*. En *Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano*. Año XV, Montevideo, ISSN 1510-4974. 2009
15. LANDA ARROYO, César. “Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú”. En: *Justicia Constitucional*. Año II, N° 4, Lima, Palestra, 2006.
16. LANDA ARROYO, César. “*Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional*”, Palestra Editores, Primera Edición, Lima, 2011.
17. LEÓN VÁSQUEZ, Jorge, “El Tribunal Constitucional y la configuración de su Derecho Procesal”. En: *Justicia Constitucional*.



Año II, Nº 4, Lima, Palestra, 2006.

18. MONROY GALVEZ, Juan. “La Autonomía Procesal” y el Tribunal Constitucional: Apuntes sobre una relación inventada. Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 2007.
19. MENDOZA ESCALANTE, Mijail. “La autonomía procesal constitucional”. Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina, II, 4 (julio-diciembre 2006), Palestra Editores, Lima, 2007.
20. PÉREZ GORDO, Alfonso. El Tribunal Constitucional y sus funciones. Barcelona. Ed. Bosch, 1982.
21. PÉREZ ROYO, Javier, “*Curso de Derecho Constitucional*”. Marcial Pons, Quinta Edición, Madrid - 1998.
22. PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de derecho Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 3 Ed. 1. II, 1987.
23. PRIETO SÁNCHEZ, Luis. *Neoconstitucionalismo y ponderación judicial*. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001.
24. QUIROGA LEÓN, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. Estudios Constitucionales, vol. 3, núm. 2, Santiago de Chile. 2005.
25. RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson. «Creación de reglas procedimentales no debe ser mera autarquía». Gaceta Constitucional, 72, diciembre 2013.
26. RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia. La “autonomía procesal” del Tribunal Constitucional. Ed. Civitas, Madrid, 2003.
27. RODRÍGUEZ PATRÓN, Patricia. “La libertad del Tribunal

Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal".  
En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21, Nº 62,  
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

28. SAGÜÉS, Néstor Pedro, "Derecho procesal constitucional", Ed.  
Astrea, Buenos Aires, 1989.

29. VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. El control de la  
constitucionalidad de la ley, Estudio de derecho comparado.  
México, Editorial Porrúa, S.A., 1978.

### **Linkografía**

1. BLUME FORTINI, Ernesto. 'El tribunal constitucional peruano como supremo intérprete de la constitución'. Ensayo elaborado a raíz de los estudios realizados por el autor en la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Escuela de Graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consulta: 20 de marzo del 2017.  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085306.pdf>.
2. CIDONCHA MARTÍN, Antonio. '*Garantía institucional, dimensión institucional y derecho fundamental: balance jurisprudencial*'. Biblioteca jurídica virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consulta: 02 de abril del 2017.  
<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/23/est/est5.pdf>
3. El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a diferentes niveles España:El Tribunal Constitucional. Consulta 02 de enero del 2017:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS\\_STU\(2017\)593506\\_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf)

4. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. “El principio de autonomía procesal”. Notas para su aplicación material. Pensamiento Constitucional N° 19, 2014, pp. 331-354 / ISSN 1027-6769. Consulta: 09 de enero del 2017.  
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/12532/13092>.
5. GRÁNDEZ CASTRO, Pedro y CARPIO MARCOS, Edgar. “El Tribunal Constitucional peruano cumple 10 años desde su reinstalación” (reporte de su labor jurisprudencial durante el año 2006). pp.139-161. Consulta: 27 de diciembre de 2016.  
[www.idp.org.br/download.php?arquivo=w92j5x9i16t9.pdf](http://www.idp.org.br/download.php?arquivo=w92j5x9i16t9.pdf)
6. HERNÁNDEZ CASTELLANOS, Donovan Adrián. “Idea del Estado en Carl Schmitt Aportes para una genealogía de lo político”. Argumentos (Méx.) México, v. 23, pp.107-129., dic. 2010. Consulta: 17 de marzo de 2017.  
[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0187-57952010000300005&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300005&lng=es&nrm=iso)
7. MORALES GODO, Juan. Del Tribunal de Garantías Constitucionales al Tribunal Constitucional peruano. Análisis jurídico-político comparativo. Derecho PUCP, [S.l.], n. 53, pp. 65-88, dec. 2000. ISSN 2305-2546. Consulta: 18 de febrero 2017.  
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6555>
8. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. (2003). “Los Tribunales Constitucionales de Sudamérica a Principios Del Siglo XXI”. Ius et Praxis, 9(2), pp. 59-131. Consulta: 17 de enero de 2017.  
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000200003>
9. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. *‘La integración y estatuto jurídico de los magistrados de los tribunales constitucionales de*

*Latinoamérica*'. Estudios Constitucionales, vol. 6, núm. 1, 2008, pp. 281-299, ISSN 0718-0195; Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, pp.281-286. Consulta: 20 de marzo del 2017. <http://132.248.9.34/hevila/Estudiosconstitucionales/2008/vol6/no1/12.pdf>

10. SALGADO PESANTES, Hernán y OYARTE MARTÍNEZ, Rafael. 'El Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en Ecuador', Biblioteca jurídica virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp.433-458. Consulta: 02 de febrero del 2017. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/52.pdf>
11. Memoria 2012 del Tribunal Constitucional, p. 39. Consulta: 27 de diciembre de 2016. <<http://www.tc.gob.pe/audiencias/memoria/memoria-2012.pdf>>